**UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL**

**MISIÓN Y VISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORAL EN LOS JUICIOS CIVILES EN VENEZUELA**

Trabajo Especial de Grado, presentado
Como requisito parcial para optar a la
Especialización en Derecho Procesal

Autor: Abg. Liliana A. González

Asesor: Dr. Frank Petit Da Costa

Caracas, Junio del 2008

UNIVERSIDAD CATÓLICA “ANDRÉS BELLO”
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

APROBACIÓN DEL ASESOR

En mi carácter de Asesor del Trabajo Especial de Grado, presentado por la ciudadana abogada **Liliana Andreína González González**, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal, cuyo título es: **Misión y visión de la implementación del procedimiento oral en los juicios civiles en Venezuela**. Considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2008.

Dr. Frank Petit Da Costa
C.I. V- 3.094.736

UNIVERSIDAD CATÓLICA “ANDRÉS BELLO”
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

**MISIÓN Y VISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORAL EN LOS JUICIOS CIVILES EN VENEZUELA**

Autor: Abg. Liliana A. González

Trabajo especial de Grado de Especialización en Derecho Procesal aprobado
(a) en nombre de la **UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO**, por el
jurado abajo firmante, en la ciudad de Caracas, a los días del mes
de de 2008.

Dr. (a)
C.I. N°

Dr. (a)
C.I.N°

DEDICATORIA

A mi madre Lilia, quien es mi inspiración y ejemplo de vida y de actitud ante los retos que nos impone nuestro andar.

A mi esposo José Ángel, cuyo amor, respeto, confianza y amistad marcan mi sendero.

A nuestra señora Virgen del Valle, quien es mi patrona.

ÍNDICE GENERAL

Pág		
	APROBACIÓN DEL ASESOR	ii
	APROBACIÓN DEL JURADO	iii
	DEDICATORIA	iv
	INDICE GENERAL	v
	INTRODUCCIÓN	1
	CAPÍTULOS	
	I. LA ORALIDAD DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO	
	A. Noción de oralidad y procedimiento oral	7
	1. Definición de oralidad	7
	2. Procedimiento Oral	11
	B. Antecedentes de la oralidad en el sistema venezolano	12
	1. Antecedentes de la oralidad	12
	2. Antecedentes de la oralidad en el derecho venezolano	16
	C. La oralidad en la legislación venezolana	17
	1. La oralidad en la legislación venezolana	17
	2. Influencia del Código Procesal Civil Modelo para Ibero-	

América en el Proceso Oral en Venezuela	18
D. El procedimiento oral en el Código de Procedimiento Civil	19
1. Determinación de la competencia en razón de la Cuantía y de la materia	20
2. Fases del procedimiento	23
a. Instrucción de la causa	23
b. Demanda	23
c. Citación	26
d. Contestación de la demanda	27
e. Cuestiones Previas	31
3. Audiencia Preliminar	43
4. Las pruebas en el procedimiento oral	44
5. La Audiencia o Debate Oral	49
II. PRINCIPIOS PROCESALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ORAL	
A. Los principios procesales que rigen el procedimiento oral	51
1. Inmediación	51
2. Identidad Física del Juez	53

3. Concentración	54
4. Principios comunes a todo procedimiento	55
B. Relación de los principios procesales y las etapas Del procedimiento oral	56
III. EL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO	
A. Forma escrita del proceso	58
B. Crisis del sistema. Causas y Consecuencias	59
IV. LA ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, PENALES Y DE TRÁNSITO TERRESTRE	
A. Comparación de las etapas procesales en cada uno de estos Procedimientos	63
B. Ventajas y desventajas de la oralidad en éstos Procedimientos	68
V. EL JUEZ Y EL PROCEDIMIENTO ORAL	
A. Principio de imparcialidad y discrecionalidad	70
B. Potestades del Juez	75
C. Responsabilidades del Juez	78

VI. LA ORALIDAD COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL RETARDO PROCESAL

- A. Análisis de las Resoluciones No. 00038 dictada el 14 de junio del 2006, No. 2006-00066 del 18 de octubre del 2006, dictadas por la Sala Plena del Tribunal Suprema de Justicia y el Acuerdo de la Sala Civil de ese Máximo Tribunal dictado el 15 de marzo del 2007 80
- B. La oralidad como solución al problema del retardo procesal 89

CONCLUSIONES 92

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 96

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de veinte años se vive en Venezuela una realidad procesal, caracterizada por la lentitud de los procesos, retardos, corrupción, la ausencia de una justicia oportuna, eficaz y expedita, aunado a la imperante carencia de políticas judiciales efectivas que resuelvan la grave problemática judicial que nos aqueja.

Para muchos analistas la lentitud de los procesos judiciales, es el resultado de procesos judiciales largos y formalistas, sumado a la falta de capacitación del personal judicial integrado por asistentes, secretarios, defensores, fiscales, abogados litigantes, y el excesivo cúmulo de expedientes que reposan en los tribunales, los cuales humanamente los jueces no pueden sentenciar dentro de los lapsos establecidos.

Además, la rigidez del principio dispositivo, según el cual corresponde a las partes determinar el alcance y contenido de la disputa, dejando al tribunal la sola consideración de lo que las partes han planteado en el juicio, disminuye las posibilidades de que el juez, conozca la verdad de lo litigado, y proceda a dictar una sentencia más acorde a una justicia real. Cabe recordar que bajo el principio dispositivo rige el adagio "*quod non est in actis, non est in mundo*", que significa lo que no está en el expediente no está en el mundo.

Las facultades actuales del Juez en el proceso, están limitadas al ejercicio de la potestad disciplinaria, una muy limitada iniciativa probatoria, el control y dirección del proceso, que en conjunto no contribuyen en gran medida a la finalidad de la justicia. Se podría incluso afirmar que el Juez, es un mero árbitro ante la actividad de las partes.

En opinión del procesalistas como Cuenca (2000, 248):

“En el proceso escrito las partes tienen amplio dominio de la controversia y en algunos ordenamientos donde la preeminencia del principio es casi absoluta, está abandonado a la sola voluntad de ellas, los poderes del Juez se encuentran sumamente reducidos”.

Esto cambiaría radicalmente bajo el sistema oral donde prevalecerían el principio de inmediación, donde el Juez interactuaría directamente con las partes en los actos del proceso, teniendo no solo control y dirección de un debate sino con una libertad para indagar e investigar los hechos que se pretenden probar, contribuyendo esto a una más humana y real justicia.

Por ello, la legislación que rige el proceso civil tradicionalmente escrito, es objeto de un estudio preliminar en procura de una reforma legislativa, que pretende la implementación del procedimiento oral en el proceso civil venezolano.

Bajo estos postulados y con el fin de alcanzar una justicia real, efectiva y oportuna la Constitución de la República Bolivariana de 1999, consagró la oralidad en todos los juicios. En este sentido, el artículo 257 de la Carta Magna establece que:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

La presente investigación tiene por objeto determinar la eficacia de la implementación del procedimiento oral con respecto a la realidad procesal de nuestros tribunales, reforma que esta fundamentada en el fin de obtener una justicia efectiva sin dilaciones indebidas, tal como lo consagra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La aplicación del procedimiento oral en todos los procesos que conocen los tribunales, contribuirá en gran medida a una mejor y más justa administración de justicia, objetivo esté que en los momentos actuales y, claro está, en los futuros debe ser el norte de todos los integrantes del sistema de justicia.

No obstante, cabe destacar que la oralidad no significa abolición total de la escritura sino predominio de la forma oral sobre la escrita en la realización de los actos procesales, la idea del proceso oral combina la expresión de la palabra hablada con la escrita.

Cappelletti (1973,56) sobre el procedimiento oral expresa:

“Ciertamente la oralidad no significa, ni siquiera donde la idea es acogida de la manera más corriente, abolición total de la escritura como instrumento de comunicación entre los sujetos, privados y públicos del proceso. Oralidad significa como vengo repitiendo que el proceso culmina en una audiencia oral, en la cual el juez oye a los testigos y eventualmente también a las partes”.

Afirma Rengel Romberg (1995,178):

“Un sistema procesal es oral cuando el material de la causa, a saber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de la consideración judicial solamente si se presentan de palabra; y es escrito cuando la escritura es la forma ordinaria de las actuaciones”.

Aún cuando esto es así, la experiencia derivada de la puesta en práctica de la oralidad en procedimientos como el laboral, el penal y el de responsabilidad en materia de protección al niño y al adolescente, no deja dudas sobre las bondades de este sistema, y apoya a su pronta implementación en el procedimiento civil.

La consagración e implementación del procedimiento oral en estos procesos, obedeció fundamentalmente a la necesidad de darle mayor celeridad a los juicios, cambió el paradigma del Juez como simple espectador, y el de las partes como únicas facultadas para impulsar el proceso y verificar los hechos contenciosos o litigiosos.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia consciente de la realidad de la realidad procesal de nuestros tribunales, dictó las Resoluciones N° 2006-00038 dictada 14 de junio del 2006, la No. 2006-00066 del 18 de octubre del 2006, ambas por la Sala Plena y el Acuerdo de la Sala Civil dictado el 15 de marzo del 2007, mediante los cuales se resolvió la tramitación por el procedimiento oral las causas a que se refiere el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, con excepción de las previstas en el ordinal segundo, siempre que el interés principal no exceda en bolívares, al equivalente a dos mil novecientos noventa y nueve unidades tributarias (2.999 UT).

Analizar los cambios que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia por medio de las señaladas Resoluciones, son el objetivo general de la presente tesis, para ello, se analizará el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, y la situación actual del sistema judicial venezolano. Se identificarán los principios procesales que rigen el proceso oral, así como los elementos que caracterizan la función del juez en el proceso oral. Se comparará el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, con el establecido en otros cuerpos legislativos como el Código Orgánico Procesal Penal, y la Ley Orgánica del Trabajo. Finalmente se determinarán los efectos de la implementación de las Resoluciones No. 00038, y 00066 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

La presente investigación resulta de gran importancia, dada la novedad de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y

su posible impacto dentro del sistema procesal civil. Así, como en el estudio de la urgencia de una reforma del procedimiento escrito al oral en materia civil, cuyos efectos nos proponemos analizar, por medio de la utilización de métodos cualitativos, logrando concluir que con la implementación del procedimiento oral se puede obtener la tan anhelada celeridad procesal, logrando alcanzar el fin último que es la justicia.

Este trabajo es de corte monográfico y documental. El informe está dividido en Capítulos, cada uno de los cuales analiza uno de los objetivos que fueron planteados. La investigación fue realizada en base a fuentes bibliográficas y documentales, tales como revistas especializadas, revisión de textos de autores nacionales y extranjeros, así como en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en donde encontramos nuestra mayor limitación, dada la escasez de criterios jurisprudenciales sobre el tema. El análisis del problema se hizo en forma descriptiva, procurando la exhaustividad del estudio.

CAPITULO I

LA ORALIDAD DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO

A. Noción de Oralidad y Procedimiento Oral.

1. Definición de la oralidad.

La noción de oralidad refiere a una forma de comunicación verbal, es decir, que se expresa por medio del habla.

El profesor Rengel Romberg (1995, 178) afirma: “Un sistema procesal es oral cuando el material de la causa, a saber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de la consideración judicial solamente si se presenta de palabra.

Chiovenda (1997, 28) expone:

“Dependiendo que aplique o no, o aplique en diversa medida, los principios (conexos entre sí íntimamente), de la oralidad, según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en la audiencia, es decir en aquel momento y lugar dados en que el juez escucha a las partes y dirige la marcha de la causa”

Por su parte Alcalá Zamora, citado por Petit (2004, 27), expresa:

“(...) cuando se habla de oralidad, es conveniente distinguir tres aspectos o manifestaciones, que son: el principio de la oralidad, el procedimiento oral y la oratoria forense.

El primero, es uno de los principios que rigen la actividad procesal oral; el segundo, se identifica con el tipo de proceso, en el que convergen otros principios, como el de la inmediación, concentración, publicidad, identidad física del Juez, instancia única en cuanto al desarrollo del procedimiento y el de la libre convicción en cuanto al desarrollo de las pruebas; y la oratoria forense, que es la expresión oral o la oralidad pura.”

Tal como señalan estos autores, tanto la oralidad como la escritura son formas de expresión del proceso, sin embargo, dada la complejidad de las relaciones patrimoniales de los particulares entre sí y con el Estado, así como la naturaleza técnica de los procedimientos actuales, no es posible concebir un proceso exclusivamente oral, o escrito. Toda controversia judicial es hoy en día contiene actos orales y actos escritos, por lo que naturaleza oral o escrita depende de la prevalencia que tenga en el proceso un elemento sobre otro. Por ello, no hay que juzgar solamente la exterioridad de la oralidad o de la escritura, para determinar si un proceso es oral o escrito.

Couture (1981, 199) señala que este principio de oralidad “surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”. De ello se puede inferir que por oralidad no se entiende ni la simple discusión oral, ni mucho menos, la exclusión de la escritura del proceso. De aquí que este autor plantea que todo proceso

moderno es mixto, y aclara “pero un proceso mixto se dirá oral o escrito según el puesto que el mismo conceda a la oralidad y a la escritura, y, sobre todo, según el modo en que en el mismo actúe la oralidad” (Ibid, 251).

Véscovi (1984, 59) refiere que no existe un régimen puro y que todos son “mixtos con diferente combinación de elementos escritos y orales.”

Para Cuenca (2000, 248): “El sistema oral establece la preeminencia de la palabra hablada sobre la escrita”.

Miliani (2007-17):

“La Adopción del juicio oral no conlleva abandonar la escritura, a causa de que sigue el medio perfecto para expresar el pensamiento y de conservar lo expresado en las incidencias del proceso, además de que no existe un juicio exclusivamente oral, como ocurre en la formulación inicial de la pretensión del demandante para que ésta pueda trasladarse al demandado, en la promoción de los medios de prueba para que en la audiencia oral sean objeto de análisis y estudio por los interesados, salvo la realización de algunas pruebas que no pueden ser evacuadas por el mismo tribunal por razones de competencia territorial, en la que debe librarse comisión al tribunal comitente; pero lo fundamental del juicio como son la conciliación, la determinación del objeto del proceso, el saneamiento, lo relativo a los medios de pruebas, de todos los actos que requieran el levantamiento de un acta, y en fin lo que concierne a la ordenación del proceso, se va a desarrollar en la audiencia o debate oral así como a la comunidad que desea participar en el mismo”.

Tal como hemos visto, la oralidad no implica abolición total de la escritura sino predominio de la forma oral sobre la escrita en la realización de los actos procesales, la idea del proceso oral combina la expresión de la palabra hablada con la escrita.

En tal sentido expresa Rengel Romberg (1995, 179):

“La oralidad, como principio rector de los procesos de tipo oral, no debe entenderse en su acepción simplista de mera expresión hablada de los actos procesales, pues en esa forma seríamos llevados a equívocos insuperables que nos ocultarían las ventajas reales de un proceso de tipo oral. En realidad, la estructura oral de un proceso depende también de la vigencia de otros dos principios fundamentales: la *concentración* y la *inmediación* procesales, los cuales forman los tres términos de un trinomio único, o como expresa Carnelutti: “la fórmula del concepto” Chiovendano de la oralidad”.

La exclusividad de la oralidad, implica que un proceso sea únicamente oral, lo cual traería consigo que no podría existir ningún instrumento físico de las actuaciones procesales, y por ende ninguna constancia o instrumento probatorio de lo ocurrido en las audiencias. Tal situación resulta imposible de aplicar en la práctica, menos en un sistema garantista de los derechos fundamentales, constitucionalmente consagrado, entre los cuales se encuentra el proceso debido.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 860 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, en el procedimiento oral la forma escrita

de los actos procesales sólo será admitida en los casos expresamente contemplados en las disposiciones del presente Título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral, que requieran el levantamiento de un acta. Son aplicables supletoriamente en el procedimiento oral las disposiciones del ordinario en todo aquello no previsto expresamente en este Título, pero en éstos casos, el Juez procurará asegurar la oralidad, brevedad, concentración e inmediación del procedimiento oral. En todo caso, las disposiciones y formas del procedimiento oral no pueden renunciarse ni relajarse por convenio de las partes ni por disposición del juez.

Significa entonces que la oralidad es un principio fundamental del derecho procesal, en el cual prevalece la forma de comunicación oral sobre la escrita, quedando ésta como mecanismo de apoyo, resguardo, y prueba de los discursos, actos o evidencias que hayan surgido durante el juicio.

2. Procedimiento Oral

Según Couture (2002, 99): “En su acepción común, el vocablo “proceso” significa progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia delante, desenvolvimiento. En sí mismo, todo proceso es una secuencia”.

Para el profesor Ortiz (2003, 439):

“El proceso es el conjunto de relaciones que se produce cuando la acción de los particulares se pone en contacto con la jurisdicción

ejercida por el Estado para el conocimiento, decisión y ejecución de los intereses y derechos tutelados por el ordenamiento jurídico”.

Proceso y procedimiento no son términos sinónimos. El proceso es único, en tanto se encuentran en él acción y jurisdicción, el procedimiento es la forma como se cumplen los actos procesales. Por ello, es permisivo aseverar que existe el procedimiento civil (y dentro de éste el ordinario y el especial), el penal, laboral, agrario, contencioso administrativo, entre otros.

Ante estas consideraciones precedentes, el procedimiento oral sería el conjunto de actos realizados por los sujetos que conforme a lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyen el sistema judicial, tendentes a lograr el conocimiento, decisión y ejecución de los intereses intersubjetivos y los derechos derivados de las relaciones jurídicas, tutelados por el ordenamiento jurídico.

B. Antecedentes de la oralidad en el sistema venezolano.

1. Antecedentes de la oralidad.

Los seres humanos, a través de nuestra historia, hemos encontrado diversas formas de comunicación, la más primitiva es la oral, la noción de oralidad implica un sistema simbólico de expresión, a través del cual se

comunican los seres humanos. Durante mucho tiempo, fue incluso, el único modo de expresión y de transmisión de conocimientos, e implica la comunicación por medio del habla.

La vida en sociedad, la necesidad de reglar las situaciones humanas, y de resolver los conflictos intersubjetivos, nos ha llevado a adoptar diversas formas de solución de controversias.

Un breve estudio de los orígenes de la oralidad, nos lleva a disertar en primer lugar sobre el Derecho Romano, fue en este período histórico, donde construyeron los cimientos, la base y estructura de lo que es hoy en día el proceso civil. Por ello, al referirnos a la oralidad, debemos hacer mención de la formación histórica y evolutiva del proceso civil, ya que entre los principios nacidos en el derecho romano se encuentra el de la oralidad.

En efecto, el proceso civil de hoy en día se estructura en las ideas romanas, lo cual se evidencia del estudio de los sistemas y épocas romanas.

En cuanto a las épocas, sólo haré mención a las dos principales, que son la del derecho nacional, y la del derecho honorario y de gentes.

La primera época, llamada “Del Derecho Nacional”, transcurre desde la fundación de Roma hasta la creación de la pretura. Durante este tiempo, se convierte en objeto del derecho procesal civil, la protección de los

derechos privados de los ciudadanos. El proceso se realizaba mediante formas eminentemente orales, eran la *actio* o *iudicium* y la *lis* o *iurgium*.

El procedimiento era público, ya fuese *in iure* ante el Magistrado, o *in iudicio* ante el jurado *iudex*.

La segunda época se conoce como “El Derecho Honorario y de *Gentes*”, se inicia con la creación de la *pretura* y culmina con el reinado de Adriano. Dentro de ésta etapa histórica se conservaron las mismas características del período anterior.

Por otra parte, los sistemas fundamentales del procedimiento civil romano, fueron el de las acciones de la ley, el formulario y el extraordinario.

En el sistema de las acciones de la ley, la oralidad, la inmediatividad, la actuación de las partes, y la libre apreciación de las pruebas parecen ser desde el primer momento, los rasgos fundamentales de este procedimiento. Se trata de asegurar la conjunción de las partes para resolver las controversias: “*bis de eadem re ne sitio actio*”, pronunciándose ciertas fórmulas verbales.

El sistema formulario nació con la *Lex Aebutia*, que creó la fórmula al lado de la *legis actio*, dejando un derecho de opción entre ambos procesos y quitando la obligatoriedad del de las acciones de la ley, coexistiendo

entonces dos sistemas: uno verbal y el otro escrito. Ambos elegibles con aprobación del Magistrado.

A pesar de ello, la oralidad se mantuvo como elemento substancial prevalecte sobre la escritura, al grado de que cuando se verificó la transformación del derecho procesal romano en virtud de las legis luliae, que eliminaron las legis actiones como formas facultativas, hubo necesidad de establecer diversas excepciones, es decir, la legis actio y la legis actio dammni infecti, ya que la transición de la fórmula verbal a la escrita no surtió efecto.

En la etapa de las extraordinariae cognitiones, el procedimiento se desarrollaba ante el Magistrado como único juzgador durante el curso de todo el proceso.

El período primitivo posterior al Romano, fue la época del apogeo de la escuela judicialista originada en Bolonia, y del derecho común medieval Italiano, e Italiano-canónico, donde se adoptó la prevalencia de la escritura sobre la oralidad.

Luego, se pasó del procedimentalismo al procesalismo científico iniciado por Oscar Bulof, quien concibió al proceso como una relación jurídica de naturaleza publicista y proclamó la autonomía, sistematización y teoría del derecho procesal.

El resurgimiento de la oralidad tuvo lugar en el año 1916 cuando el Cardenal Angello Mai descubre en Verona las “Instituciones de Gayo”, que relatan el desarrollo del proceso romano. Así ante los conflictos de la época, se hizo necesario reformar el sistema escrito, con tendencia hacia la oralidad.

El *Code de Procédure Civile* francés de 1806, es el antecedente inmediato de la oralidad. En el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, aparecieron el Código de Procedimiento Civil de Hannover de 1850, elaborado por Gerhard Adolf Wilhem Leonhardt; luego el *Zivilprozessordnung* o Código de Procedimiento Civil Alemán de 1877, y el Código Austríaco de 1895.

La institución de la oralidad permaneció en los Códigos de Procedimiento Civil de las naciones Europeas y Latinoamericanas.

2. Antecedentes de la oralidad en el Derecho Venezolano

En Venezuela, el Código de Procedimiento Civil de 1836, estableció el llamado juicio verbal, el cual era aplicable a los asuntos de menor cuantía. El resto de los procesos han sido desde entonces, esencialmente escritos, y no ha habido reformas legislativas al efecto. El actual Código de Procedimiento Civil de 1987, introdujo el proceso oral, para determinadas materias y dentro de una limitada cuantía.

El cambio sustancial se produjo con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, donde se establece la implementación del procedimiento oral, en todos los procesos, esto, ha dado origen a diversas reformas legislativas en materias como penal, laboral, agrario, tránsito terrestre, entre otras.

C. La oralidad en la Legislación Venezolana

1. Oralidad en la Legislación Venezolana

Los antecedentes más inmediatos son los siguientes instrumentos: a) Ley del Estatuto de la Función Pública (2002); b) Decreto Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (2001); c) Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001); d) Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998); e) Código Orgánico Procesal Penal (1998 con sucesivas reformas). Otro antecedentes menos reciente, lo son: a) Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988); b) Código de Procedimiento Civil (1986); y c) Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (1984).

Ahora bien, el primera visión del juicio oral que tuvimos en nuestro país, estuvo contemplada en el Código de Procedimiento Civil Venezolano de 1836, que contenía un juicio denominado “verbal”, el cual era aplicable a los asuntos de mínima cuantía.

Tradicionalmente se ha previsto la oralidad en nuestro sistema procesal, pero como un procedimiento aplicable a casos especiales o de menor cuantía, así lo vemos en el actual Código de Procedimiento Civil, donde el legislador sin ánimo de abandonar la oralidad, optó por un procedimiento ordinario escrito para tramitar la gran mayoría de los juicios.

2. Influencia del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica en el Proceso Oral en Venezuela.

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica dispone sobre la oralidad cuando regula Actividad Procesal (Título VI), dentro de las Disposiciones Generales (Capítulo I) con lo relacionado a Audiencias (Sección V). También en el Proceso de Conocimiento (Título IV), el Proceso Ordinario (Capítulo I), donde dispone sobre las audiencias preliminar y complementaria (Arts. 300 al 303).

Establece el primer párrafo del artículo 95, que en los procesos que se desarrollan por audiencias "...el Tribunal las presidirá por sí mismo, bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional".

En relación a la oportunidad de las audiencias, establece el artículo 96: "...se deberán fijar las fechas de éstas con la mayor contigüidad posible a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional".

Respecto de la necesidad de documentación de las audiencias orales, el artículo 97 dispone: "...de lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida, en acta que se librá durante su transcurso o al cabo de ella."

La regulación considerada es similar a la de nuestra normativa procesal, de allí la trascendencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, proponente de este Código, y su importante rol de orientador del desarrollo de la legislación procesal de los países de habla hispana, y de observar las modernas tendencias en materia procesal civil. Por ello, se debe reconocer la influencia de la normativa expuesta en este instrumento legal, en la legislación venezolana, y en especial, en el procedimiento oral, previsto en el Código de Procedimiento Civil Venezolano.

D. El Procedimiento Oral en el Código de Procedimiento Civil

El Título XI del Libro Cuarto de los Procedimientos Especiales, en sus artículos 859 al 869 del Código de Procedimiento Civil, contienen las normas que regulan el procedimiento oral.

1. Determinación de la competencia en razón de la cuantía de la materia

De acuerdo a lo establecido en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil:

“Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas, siempre que su interés calculado según el Título del Libro Primero de este Código, no exceda de de doscientos cincuenta mil bolívares.

1º Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Código.

2º Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y las demandas por accidentes de trabajo.

3º las demandas de trabajo.

4º Las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los particulares, deban tramitarse por el procedimiento oral”.

La determinación de las Circunscripciones Judiciales y de los Tribunales en que entrará en vigencia las disposiciones del procedimiento oral, así como, el establecimiento de la cuantía y las materias sobre las cuales será aplicable este procedimiento, correspondía al Ejecutivo Nacional, situación que fue modificada, correspondiéndole ahora a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia dictada por la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, el 12 de junio del 2003, con ponencia del magistrado Dr. Antonio J. García, en la cual estableció:

“(…) Lo anterior obliga llegar a una conclusión: si bien la materia de regulación de los Poderes Públicos sigue siendo reserva legal nacional y sin negar que la ahora Asamblea Nacional puede delegar parte de su poder -según se ha declarado precedentemente- ya no existe posibilidad de hacerlo en el Ejecutivo Nacional en todo lo relacionado con el Poder Judicial. No puede ser de otra manera, puesto que la propia Constitución fija un límite que no existía en la anterior: la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial – específicamente de este Máximo Tribunal-, con lo que cualquier delegación al Poder Ejecutivo sería contraria a la voluntad del constituyente (…).”

En base a esta atribución, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 14 de junio del 2006, dictó Resolución No. 2006-00038, resolvió que se tramitarán por el procedimiento oral, las causas a que se refiere el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, con excepción de las previstas en el ordinal segundo, siempre que el interés principal no exceda en bolívares, al equivalente dos mil novecientos noventa y nueve unidades tributarias (2.999 UT).

Según el artículo segundo de la mencionada Resolución, a partir de su entrada en vigencia, todos los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo.

Como consecuencia de lo anterior, fue modificada la cuantía de los Tribunales de Primera Instancia de las Circunscripciones señaladas, los cuales conocerán de las causas cuya cuantía sea superior a las dos mil novecientos noventa y nueve unidades tributarias (2.999 UT).

Sin embargo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución N° 2006-00066 dictada el 18 de octubre del 2006, considero que no están dadas actualmente todas las condiciones de infraestructura y de capacitación de personal, necesarias para la puesta en marcha del procedimiento oral en materia civil y mercantil, al cual hace referencia la Resolución N° 2006-00038 de fecha 14 de junio de 2006. Por lo que resolvió modificar el texto del artículo 9 de la mencionada resolución en la forma siguiente: “La presente Resolución, con excepción del artículo anterior, entrará en vigencia el día 1º de marzo del 2007.

Posteriormente, la Sala de Casación Civil, mediante acuerdo dictado el 15 de marzo del 2007, interpreta la Resolución N° 2006-00066, afirmando lo siguiente:

“Las normas contenidas en la Resolución vigente deben ser interpretadas de manera inherente y no puede aislarse del contenido del artículo 5 ejúsdem. En tal sentido, la competencia por la cuantía a la cual hace referencia el artículo 1 de la Resolución, sólo comprende aquellas causas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral previsto en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: (...). Lo cual determina que las materias excluidas de la aplicación del procedimiento oral en el referido artículo 859, no están comprendidas en el cambio de competencia por la cuantía, sino que se rigen por aquéllas normas y regulaciones vigentes.

Bajo estos principios queda establecido, hasta tanto se resuelva aclarar o ampliar por vía de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, que los tribunales de primera instancia conservan su competencia por la materia, territorio y cuantía para conocer de las causas, salvo aquellas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral”.

Por lo que los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, adoptaron el criterio de declinar la competencia en todas aquellas materias comprendidas en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, que tengan un procedimiento contencioso contemplado en una ley especial, ya que las mismas no están contenidas en el cambio de competencia por la cuantía, sino que se rigen por aquellas normas y regulaciones vigentes, tal como se desprende del contenido del acuerdo de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

2. Fases del procedimiento

El procedimiento oral consta de tres fases principales: la primera es la Introducción de la causa; segunda la instrucción o audiencia preliminar y finalmente la audiencia o debate oral.

a. Introducción de la causa

Se inicia con el libelo de la demanda y concluye con la presentación del escrito de contestación.

b. Demanda

Para Escovar (2000, 3):

“La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante el cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, y se dirige al órgano del Estado (juez) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La

demanda es, además, el primer acto del proceso (“*nemo iudex sine actore*”). La primera forma de la actividad de la parte en el proceso consiste en demandar”:

Establece el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil:

“El procedimiento oral comenzará por demanda escrita que deberá llenar los requisitos exigidos en el artículo 340 de este Código. Pero el demandante deberá acompañar con el libelo toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral.

Si el demandante no acompañare su demanda con la prueba documental, y la lista de testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentran”.

Se exige la forma escrita del acto procesal, tal como ocurre con el procedimiento ordinario, en este sentido, la demanda se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez, conforme lo establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil.

La admisión de la demanda, se hace en forma escrita y ocurre cuando la misma, no es contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, tal como lo ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, podrá el demandante antes de producirse la citación del demandado, reformar por una sola vez el libelo de la demanda, antes de

que el demandado haya dado contestación a la demanda. En este caso, se concederán al demandado otros veinte días para la contestación sin necesidad de citación.

Una vez formalizada, surgen una serie de efectos, unos de naturaleza procesal y otros sustancial. Los primeros se refieren a la posibilidad de dictar medidas preventivas; fijar la competencia por la cuantía; iniciar los trámites de la citación del demandado; coloca a las partes a derecho; nace para el demandado la posibilidad de contestar la demanda; comienza la litispendencia. Por su parte los requisitos de naturaleza sustancial son: se produce la interrupción de la prescripción; pone en mora al deudor según el artículo 1269 del Código Civil.

Una de las particularidades más resaltantes del procedimiento oral es la obligación de acompañar al libelo de demanda, todas las pruebas documentales que disponga el demandante, así como la lista de los testigos que serán evacuados en la audiencia de juicio.

Tan severa es esta disposición, que a la demandante que incumpla con la misma, no se le admitirán nuevos documentos, salvo que se trate de documentos públicos, y el demandante haya indicado en el libelo, la oficina donde se encuentren.

La prueba de posiciones juradas, debe ser solicitada igualmente en la demanda, o posteriormente. Se prevé una doble oportunidad.

c. Citación.

El efecto procesal más importante que produce la demanda es la obligación de citar al demandado para la contestación.

En este caso, el procedimiento oral no dispone ninguna norma específica al respecto, por lo que los trámites para la citación se producen por las reglas del procedimiento ordinario.

En tal sentido, el emplazamiento se hace en primer lugar, por citación personal, es decir, por medio de compulsas con la orden de comparecencia expedida por el Tribunal, entregada por el Alguacil a la persona o personas demandadas en su morada o habitación, en su oficina o donde ejerce la industria o el comercio, o en el lugar donde se encuentre dentro de los límites territoriales de la competencia del tribunal.

Ahora bien, si el demandado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el alguacil deberá dar cuenta al Juez, y éste dispondrá que el Secretario libere una boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración del alguacil relativa a su citación, dicha boleta la entregara el Secretario en el domicilio u oficina del demandado, y dejará constancia en autos, de haber cumplido esta formalidad. Al día siguiente de la constancia efectuada por el Secretario, comenzará a contarse el lapso para la comparecencia del demandado, tal como lo preceptúa el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si el alguacil no encontrare a la persona del demandado para practicar la citación personal, se practicará por Carteles publicados en prensa, a menos que la citación fuere posible por correo con aviso de recibo, y así la parte actora lo hubiese pedido. En el caso de la citación por medio de carteles, éstos se publicaran en dos diarios que indique el tribunal, de los de mayor circulación de la localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Asimismo el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada o negocio del demandado un cartel, para que concurra a la darse por citado.

En todos los casos, el lapso se comparecencia a darse por citado es de quince (15) días de despacho, vencidos los cuales, comienza a correr el lapso para la contestación de la demanda.

Si transcurrido ese lapso, el demandado no compareciere ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, el Juez designará defensor Judicial ad-litem, con quien se entenderán las formalidades de citación.

d. Contestación de la demanda.

En cuanto a la contestación de la demanda, expresa el profesor Rengel Romberg (1995, 112): “Así como la demanda es el acto procesal de la parte actora, introductoria de la causa, la contestación de la demanda es el

acto procesal del demandado, mediante el cual éste ejercita el derecho de defensa y da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda”.

Establece el artículo 865 del Código de Procedimiento Civil:

“Llegado el día fijado para la contestación de la demanda según las reglas ordinarias, el demandado la presentará por escrito y expresará en ella todas las defensas previas y de fondo que creyere conveniente alegar.

El demandado no acompañare su demanda con la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral.

Si el demandado no acompañare su contestación con la prueba documental, y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos de que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito de contestación la oficina donde se encuentran”.

Afirma Petit (2004, 193):“La contestación, conjuntamente con la demanda, señalan los límites dentro de los cuales ha de resolverse el problema jurídico. Fija, con el libelo, los límites de la controversia, el tema a decidir, y constituye un acto procesal del demandado, que puede realizarse sin la presencia del demandante, entendido como un derecho, el derecho a contradecir”.

En la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar si contradice en todo o en partes, la pretensión del demandante, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, además deberá exponer las defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Así lo ordena el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

Entre las defensas o excepciones perentorias, el demandado deberá alegar las cuestiones previas a que hubiere lugar. Deberá oponer igualmente, la reconvencción, la impugnación de la estimación de la demanda, y el llamado a terceros.

De la misma manera que se exige al demandante el acompañamiento de todos los medios escritos probatorios, y de la lista de testigos, al escrito libelar, la ley establece la obligación del demandado idéntica obligación, so pena de no serle admitidas después, a menos que se trate de documentos públicos, y haya señalado la oficina donde se encuentran.

Cabe agregar algunos efectos de la conducta del demandado, en la oportunidad de la contestación, así tenemos que: En primer lugar, el demandado puede convenir total o parcialmente en los hechos alegados por su contraparte. Segundo: Puede negar todos los hechos y contradecir el derecho, con lo cual, la carga probatoria reposaría en manos de la parte actora, y el Juez se limitaría a resolver si el actor ha demostrado o no, los hechos alegados y si su pretensión, no es contraría a derecho. Tercero: Puede usar la famosa frase “niego, rechazo y contradigo la presente demanda, tanto en los hechos como en el derecho”, que en doctrina es llamada “contestación genérica”.

Respecto de la contestación genérica, afirma el profesor Rengel Romberg (1995, 121 y 122):

“Sin embargo, la contestación genérica tiene sus limitaciones propias, que derivan de la necesidad de un contradictorio leal y de una racional distribución de la carga probatoria:

1. No es admisible la posibilidad de defensas implícitas en la contestación genérica de la demanda, porque debiendo existir congruencia entre las negaciones del demandado y las afirmaciones del actor, cuando aquél contradice en general todos los hechos, debe entenderse esta contradicción referida a los hechos afirmados por el actor en la demanda como hechos constitutivos de su derecho. (...)

2. En virtud de la contestación genérica, el demandado sólo podría hacer la contraprueba tendente a destruir los fundamentos de la demanda, esto es, a demostrar que son contrarios a la verdad, pero no la de ningún hecho distinto de esa contraprueba que implique una defensa de inadmisibilidad de la demanda o de fondo, o perentoria, puesto que de permitirse, se violaría el principio de igualdad, y con esa violación se empararía –antes de la verdad- la mala fe del proceso”.

Cuarto: Puede negar los hechos reclamados e invocar hechos nuevos, en cuyo caso se invierte la carga probatoria del actor al demandado, quien asume la carga probatoria de sus propias defensas. La doctrina llama a esta conducta del demandado, como defensas o excepciones de fondo.

Quinto: Finalmente el demandado puede no contestar la demanda, lo cual no solo se produce cuando el demandado no comparece ni por sí, ni por medio de apoderado, sino cuando no efectúa ningún alegato o se limita a expresar que no conoce los hechos de los cuales se le está demandado.

En este caso, por aplicación de los artículos 868 del Código de Procedimiento Civil, el demandado tiene la carga de probar, dentro de los

cinco (05) días siguientes a la oportunidad de la contestación que fue omitida, pruebas que demuestren algo que le favorezca o que la demanda es contraria a derecho, en caso contrario, se le aplicarán los efectos que establece el artículo 362 del mencionado Código.

Ahora bien, en cuanto a la oportunidad de la contestación, por imperio del artículo 865, que remite al 344 ambos del Código de Procedimiento Civil, la contestación debe hacerse dentro del plazo de veinte (20) días siguientes a la citación del demandado, o del último de ellos si fueren varios. El lapso procesal se cuenta por días de despacho, de acuerdo a la interpretación que del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 01 de febrero del 2001.

En materia mercantil, cuando existan fundadas razones de urgencia, el plazo se puede reducir hasta uno no mayor de 24 horas; en materia de derecho agrario, es al quinto día; en materia laboral es al tercer día, y en materia de divorcio, es al quinto día siguiente al vencimiento de los 90 días de los actos conciliatorios.

e. Cuestiones previas

Establece el artículo 866 del Código de Procedimiento Civil:

“Si el demandado planteara en su contestación cuestiones previas de las contempladas en el artículo 346, éstas se decidirán en todo caso antes de la fijación de la audiencia o debate oral, en la forma siguiente:

1º Las contempladas en el ordinal 1º del artículo 346 serán decididas en el plazo indicado en el artículo 349 y se seguirá el procedimiento previsto en la sección 6ª del Título I del Libro Primero, si fuere impugnada la decisión.

2º Las contempladas en los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 346 podrán ser subsanadas por el demandante en el plazo de cinco días en la forma prevista en el artículo 350, sin que se causen costas para la parte que subsana el defecto u omisión.

3º Respecto de las contempladas en los ordinales 7º, 8º, 9º, 10 y 11 del artículo 346, la parte demandante manifestará dentro del mismo plazo de cinco días, si conviene en ellas o si las contradice. El silencio se entenderá como admisión de las cuestiones no contradichas expresamente”.

Afirma Petit (2004, 115): “Las cuestiones previas son defensas que se oponen, no para dar respuesta a la demanda, sino para denunciar errores de índole procesal u obstáculos de índole sustancial, que en el caso del sistema oral, impiden la conclusión de la fase de instrucción y la convocatoria a la audiencia preliminar”.

El planteamiento de las cuestiones previas, debe hacerse en la oportunidad de la contestación de la demanda, y las mismas serán resueltas, antes de la fijación de la Audiencia Preliminar. De no oponer cuestiones previas en su debida oportunidad, no podrá hacerlo nuevamente.

Tratamiento de las Cuestiones Previas

Las previstas en el ordinal 1º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Las constituyen la falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia.

Serán decididas al quinto (5to) día de despacho siguiente al vencimiento del lapso de emplazamiento, ateniéndose únicamente a lo que resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. La decisión será impugnabile con la solicitud de Regulación de Competencia, conforme a lo previsto en el artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La prevista en el ordinal 2º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio.

Respecto de la capacidad necesaria para obrar en juicio, se suele distinguir entre la capacidad jurídica o de goce y, la capacidad de obrar o de ejercicio. La primera se encuentra asociada a la noción de personalidad, más técnicamente es denominada en doctrina la “medida de la personalidad”, es decir, la medida de la aptitud para ser titular de deberes y derechos. Es innata a toda persona, porque es consustancial con la noción de personalidad. Por su parte, la capacidad de obrar o de ejercicio se presenta como la posibilidad de realizar actos jurídicos por voluntad propia y como se

puede apreciar de la propia definición, la misma no la posee toda persona física o natural, pues existen ciertas circunstancias que la imposibilitan o la limitan, entre éstas la edad.

La capacidad procesal constituye una especie de la capacidad de obrar, y se define como la posibilidad de realizar actos procesales por voluntad propia. El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la capacidad procesal, en los siguientes términos: *“Son capaces de obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderado, salvo las limitaciones establecidas en la ley”*. La capacidad procesal como subespecie de la capacidad de obrar o de ejercicio, supone la posibilidad de realizar actuaciones procesales por voluntad propia, a saber, sin la intervención de terceros que tiendan a subsanar la falta de aptitud correspondiente.

Así, quien tiene capacidad procesal puede, entre otras actuaciones: instar la jurisdicción, interponer demandas o contestarlas, darse por citado o notificado, oponer cuestiones previas, solicitar medidas preventivas o ejecutivas, comprometer en árbitros, hacer posturas en remate, etc.

La falta de capacidad procesal constituye la cuestión previa, contenida en el ordinal 2º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

La prevista en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

Son cuatro los motivos por los que puede ser intentada: Primero: Por no tener la Representación que se atribuye, según Cuenca (2004, 46): *“Cuando el demandante no pueda actuar por sí mismo; bien por razones de incapacidad, o por razones jurídicas; la ley legitima, en forma expresa, a la persona o personas que pueden actuar en juicio en representación del demandante.*

Si quien se presenta en juicio, no es la persona legitimada por la ley, sería procedente alegar esta cuestión previa”.

Segundo: Por no tener la capacidad para ejercer poderes en juicio. El demandante puede presentarse en juicio personalmente o con la asistencia o representación de apoderado judicial, que debe ser abogado por mandato de los artículos 4 de la Ley de Abogados y 166 del Código de Procedimiento Civil, que establece: *“Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados”.*

Así, cuando el apoderado designado no es abogado, o cuando está impedido de ejercer la profesión opera la cuestión previa.

Tercero: Por actuar con Poder que no está otorgado en forma legal. El contrato de mandato debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe otorgarse ante funcionario competente que deje constancia de su autenticidad, del carácter con el cual obra el otorgante, si lo hace en nombre propio o en nombre de otra persona, que firme el otorgante o un firmante a ruego.

Cuarto: Por actuar con un poder insuficiente. Se da en varios casos, por ejemplo, a) cuando el apoderado judicial actúa sin que le hayan conferido la atribución específica que ejerce, entonces, ello se traduce en insuficiencia de poder; b) Cuando el poder fue otorgado a varios abogados y no expresa que uno cualquiera de ellos puede actuar separadamente, y uno de ellos así obra, entonces, existe insuficiencia de poder.

La prevista en el ordinal 4º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil: Ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá proponerla tanto la persona citada como el demandado mismo, o su apoderado.

Esta cuestión previa procede cuando el Juez, acuerda erróneamente la citación de una persona natural o jurídica como representante del demandado, sin serlo. Por ejemplo, cuando se cita al padre como representante de un menor de edad, y aquel no tenga el ejercicio pleno de la patria potestad.

Según Cuenca (2004, 52):

“Sólo podrá oponerse esta cuestión previa: a) cuando el demandado sea una persona natural, que requiere de la representación de otra persona para obrar en juicio, por ejemplo, un menor de edad; b) cuando se trate de personas jurídicas, las cuales siempre obran a través de personas naturales que según la ley, sus estatutos o sus contratos, ejercen su representación legal; y c) en los casos que la ley legitima procesalmente a entidades que carecen de personalidad jurídica, para que obren en juicio a través de personas determinadas, por ejemplo, el Administrador de un Condominio, según la Ley de Propiedad Horizontal”.

El modo de subsanación de esta cuestión previa es con la comparecencia del demandado, o su representante legítimo.

Resulta menester destacar que este modo de subsanación y la cuestión previa en sí, ha sido fuertemente criticada en doctrina, ejemplo de ellos, es el comentario que hacen autores como Pesci-Feltri (1990, 134):

“ Finalmente la posibilidad que se le da al demandado mismo para oponer la cuestión previa carece de sentido jurídico, porque o bien no se entera de la existencia del juicio y mal puede hacer valer tal cuestión previa o se entere y entonces no tiene sentido que oponga esta cuestión previa ya que haciéndose presente en la oportunidad legal establecida, como ha decidido reiteradamente la jurisprudencia subsana cualquier vicio en la citación puesto que su presencia indica que ha tenido conocimiento de la existencia de la demanda y ha podido presentar su defensa”.

Algunas soluciones propuestas, explican que en vez de subsanarse la cuestión previa, con la comparecencia del demandado o su representante verdadero, ésta debería ser causal de nulidad y reposición de lo actuado hasta el estado de nueva citación. Así lo expresa Zoppi (1989, 328): “la falta de representación del demandado no debió mantenerse como cuestión previa, sino como alegato de nulidad y de reposición al estado de volver a citar al verdadero representante o al demandado mismo”.

La prevista en el ordinal 5º: Falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio.

Se refiere a los casos en que el demandante no se encuentre domiciliado en la República y no tenga bienes que lo arraiguen al país. El artículo 36 del Código de Procedimiento Civil establece: “El demandante no domiciliado en Venezuela, debe afianzar el pago de lo que pudiere ser

juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad suficiente, y salvo lo que dispongan leyes especiales”.

La prevista en el ordinal 6º: Defecto de forma de la demanda.

Puede ocurrir por dos motivos: el primero, por no haber llenado los requisitos que indica el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Artículo 340: El libelo de la demanda deberá expresar:

- 1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
- 2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
- 3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
- 4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporeales.
- 5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
- 6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
- 7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.
- 8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
- 9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.”

También procede la cuestión previa por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual en su primer párrafo establece: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí”.

La prevista en el ordinal 7º: La existencia de una condición o plazo pendiente.

Establece el artículo 1197 del Código Civil: “La obligación es condicional cuando la existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto”; el 1198 ejusdem: “Es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto”, el 1213 ejusdem: “Lo que se debe a un término fijo no puede exigirse antes del vencimiento”, es decir, cuando el cumplimiento de la obligación está supeditado al cumplimiento de una condición o plazo pendiente, es procedente la mencionada cuestión previa.

La prevista en el ordinal 8vo: La existencia de una cuestión prejudicial.

Comenta Cuenca (2004, 65):

“En otras palabras, existen dos relaciones jurídico materiales dependientes una de la otra; por lo tanto, para decidir la

relación dependiente, se requiere que previamente sea decidida la relación independiente; cuyo dispositivo por tener fuerza de cosa juzgada, tendrá que ser acogido en la sentencia respecto a la relación dependiente.”

La prevista en el ordinal 9no: La cosa juzgada.

La cosa juzgada puede ser alegada, como cuestión previa, o excepción procesal perentoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

Se trata de evitar que otro juez decida un caso idéntico que haya sido resuelto previamente.

La prevista en el numeral 10: La caducidad de la acción establecida en la Ley.

Para Mélich (2006, 159): “La caducidad es la pérdida de una situación subjetiva activa, que se verifica por la inobservancia de una determinada conducta impuesta por la norma para la conservación de tal situación cuando ya se goza de ella o, en caso contrario, si no se la tenía, para la adquisición de tal situación”.

La prevista en el numeral 11: Prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta.

El ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, prevé dos supuestos: a) cuando la ley prohíbe admitir la acción propuesta y b) cuando la ley permite admitir la acción propuesta, sólo por determinadas causales, de manera que si no se invocan en la demanda, esas causales señaladas en la ley, procede la cuestión previa.

Las cuestiones previas de los ordinales 7º al numeral 11, deberán ser contradichas o admitidas expresamente por el demandante, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso de contestación a la demanda. Si el demandante no se pronuncia al respecto, se tendrán como admitidas las cuestiones previas opuestas.

3. La Audiencia Preliminar

Para el profesor Vécovi, citado por Petit (2004, 246), la audiencia preliminar: “ Se trata de una primera audiencia, dentro del proceso a la que deben comparecer ambas partes y que será presidida por el Tribunal, con un muy complejo contenido, pero con el fin primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el procedimiento”.

De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil:

“Verificada oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las cuestiones previas que el demandado hubiere propuesto, el Tribunal fijará uno de los cinco días siguientes y la hora para que tenga lugar la audiencia preliminar en la cual cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquéllos que consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación; las pruebas que consideren superfluas o impertinentes, o dilatorias y las que se proponen aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se levantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan presentados las partes”.

Siguiendo la opinión del profesor Petit (2004, 247), “la audiencia preliminar tiene 3 propósitos diferentes: a) La exclusión del proceso, o por lo menos su reducción o abreviación, mediante la conciliación y avenimiento de las partes, denominado también función conciliadora. (...); b) La *definitio rei iudicandae*, o función ordenadora (...); c) El saneamiento propiamente dicho, o función saneadora”.

Ahora bien, dado que en la audiencia preliminar las partes deben expresar si convienen en algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, cabe preguntar, si puede el Juez intervenir como mediador del conflicto, e indagar posibles alternativas a los fines de lograr un acto de autocomposición procesal que ponga fin al juicio?, a pesar de que el artículo

257 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez para excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre alguna incidencia, la intervención del juez, se encuentra limitada. Así, el Juez no podría pronunciarse sobre lo principal del pleito, sin incurrir en la causal prevista en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que prevé los motivos de recusación o inhabilitación.

Por lo tanto, la función conciliadora no está prevista en la audiencia preliminar del procedimiento oral, queda a las partes la voluntad de conciliar por sí mismas, en virtud de los hechos que haya logrado probar su contraparte. El tribunal, se limitará a homologar lo convenido por las partes.

4. Las Pruebas en el Procedimiento Oral.

De acuerdo a los trámites del procedimiento ordinario, las pruebas deben ser aportadas en tres distintas etapas:

- a) Con la presentación del libelo de demanda, los documentos fundamentales de la acción. (Artículo 340 ordinal 6to del Código de Procedimiento Civil);
- b) En el lapso de promoción de pruebas (Artículos 388 y siguientes del Código de Procedimiento Civil);
- c) Hasta los informes, pueden promoverse la prueba de posiciones juradas y presentarse documentos públicos.

En opinión del Dr Rengel Romberg (Vol. III, 1995, 326):

“En resumen, puede decirse, que en las etapas del proceso probatorio, las condiciones formales de su realización hacen posible la efectividad del contradictorio y la garantía de la defensa, que son consecuencia de una buena administración de las pruebas; pues como dice Bentham, “el arte del proceso no es en esencia otra cosa, sino el arte de la administración de las pruebas”.

En nuestro sistema procesal –como en general en los sistemas latinoamericanos- no rige el principio de la unidad de la causa, o de libertad procesal, según el cual las partes en el juicio, pueden presentar sus alegaciones y pruebas según surja la necesidad, hasta el momento de la sentencia; sino que rige, como se ha visto, el principio de orden consecutivo legal con fases de preclusión, según el cual las fases del proceso adquieren la forma de términos fijos y preclusivos para la realización de diversos actos procesales”.

Resulta característico en el procedimiento ordinario, que la actividad probatoria se desarrolle en diversos momentos o etapas procesales, a pesar de ello, comúnmente limitamos las fases de pruebas a los dos momentos a que refiere el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, la promoción y la evacuación, cuando lo cierto es que la actividad probatoria se desarrolla en casi todo el juicio, siendo de suma importancia la contradicción y control de las pruebas, y del contradictorio.

El procedimiento oral no escapa a esta realidad, a lo largo del articulado que establece las reglas normativas del mismo, vemos como, se refieren a las pruebas en diversas etapas procesales, las cuales serán analizadas seguidamente:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil, la introducción de la causa, comenzará por demanda escrita que deberá llenar los requisitos exigidos por el artículo 340 del mismo Código.

Con la introducción del libelo de la demanda comienza la actividad probatoria, ya que el demandante deberá acompañar con el libelo toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre y apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral, al igual que promover en ese acto las posiciones juradas.

Se diferencia así el procedimiento oral del juicio ordinario, donde el demandante tiene la carga de consignar junto con el libelo sólo los instrumentos fundamentales de su pretensión, no siendo obligatorio, promover los testigos.

En el caso del procedimiento oral, la sanción a la falta de promoción de los medios de prueba indicados, es la inadmisibilidad de esos medios probatorios, si son promovidos en etapa posterior.

La contestación, prevista en el artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, se presentará por escrito. En este acto deberán proponerse todas las defensas de fondo, cuestiones previas, reconvención y cita en garantía.

En este acto, el demandado deberá consignar junto con su escrito, toda la información documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral.

Al igual que el demandante, el demandado deberá acompañar la documentación que fundamente sus excepciones junto con el escrito de contestación, al igual que deberá indicar a lista e identificación de los testigos que promueva, no siendo admisibles en otra oportunidad.

Una vez concluida la audiencia preliminar, el juez fijará dentro de los tres (03) días siguientes, por auto razonado la fijación de los hechos y los límites de la controversia, en el cual deberá igualmente.

De acuerdo al principio de inmediación, el desarrollo de las pruebas se debe hacer en presencia del juez que va a sentenciar, sin embargo,. Existen medios probatorios que no requieren ser evacuados ante el juez, como por ejemplo, las documentales, y otros cuya evacuación puede ser comisionada a un juez de inferior jerarquía. Así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 22 de junio del 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero:

“... Hay medios que por su naturaleza escapan de la inmediación, cuales son los documentos, debido a que su incorporación en autos no debe conllevar su lectura inmediata en audiencia, ya que tales lecturas resultan necesarias, pudiendo los jueces consultarlos sin los apuros de la audiencia; por ello, la prueba

documental o la libre con analogía hacia ella, debe ser promovida y producida antes de la audiencia oral o antes del debate probatorio, de manera que los jueces puedan tomar conocimiento de ella antes de los actos de recepción del resto de las pruebas, tal como lo previene el Código de Procedimiento Civil (artículos 864 y 865) para el proceso oral; o que se ofrezca y consigne en una oportunidad de manera que puede ser tomado en cuenta y leída antes de deliberar sobre el fondo”.

Además de las pruebas que pueden ser evacuadas en ausencia del juez, existen casos en los que el juez pueda presenciar la evacuación de la prueba, pero de manera indirecta, es decir, a través de la utilización de equipos tecnológicos. En opinión de la Sala:

“Considera esta Sala, que el principio de inmediación en su fase clásica: presencia del sentenciador en la incorporación (evacuación) de las pruebas, puede tener dos manifestaciones o grados: 1) Que el juez presencie personalmente los actos de recepción de la prueba, en los cuales –de acuerdo a lo que se disponga en la ley- puede intervenir, no sólo dirigiéndolos, sino realizando actividades probatorias atinentes al medio (interrogatorios, etc). Este grado tiene una variante, cuando en caso de varios jueces, sólo a uno de ellos la ley exige la presencia en el acto probatorio, cual es el supuesto del artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal en materia de inspecciones. 2) Que, el juez no presencie personalmente in situ la evacuación de la prueba, pero si la dirige de una manera mediata, utilizando técnicas y aparatos de control remoto, que le permiten aprehender personalmente los hechos mediante pantallas, sensores, monitores o aparatos semejantes (video conferencias, por ejemplo), coétaneamente a su ocurrencia.”

5. La audiencia o debate oral

Será fijada por el juez dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la reanudación de la causa, si hubiere quedado suspendida en virtud de la intervención de terceros, o de la evacuación de las pruebas, referidas en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, estas son, las inspecciones judiciales y las experticias.

La audiencia será presidida por el Juez, quien será su director, con la presencia de las partes o de sus apoderados.

En el acto, el Juez fijará las reglas para conservar la disciplina, ambas partes expondrán brevemente sus alegatos, comenzando siempre con la parte actora, luego se recibirán las pruebas de ambas, y se evacuarán los testigos, si los hubiere, permitiéndose a la contraparte la realización de observaciones o repreguntas a los mismos.

La audiencia deberá prolongarse hasta que concluya el debate, sin embargo, si no fuere posible hacerlo en un mismo día, el juez fijará uno de los dos (02) días siguientes, para su conclusión.

En todo caso, concluida la audiencia, el Juez se retirará por un tiempo que no podrá exceder de treinta (30) minutos, y dictará su decisión en forma oral, expresando los motivos de hecho y de derecho de su decisión. La

sentencia, se extenderá por escrito, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes.

En el procedimiento oral las decisiones interlocutorias son inapelables, salvo disposición especial en contrario, pero la definitiva podrá ser recurrida en el término de cinco (5) días de despacho, siguientes a la publicación del fallo completo.

En la segunda instancia se observarán las reglas del procedimiento ordinario.

CAPITULO II

PRINCIPIOS PROCESALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ORAL

A. Los principios que rigen el procedimiento oral

1. Inmediación

Señala Echandía (1997, 68): “Como del significado literal se infiere, significa que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. De ahí que la inmediación puede ser subjetiva, objetiva y de actividad”.

Durante el proceso, la regla o máxima de inmediación procesal implica la comunicación personal del juez con las partes, y el contacto directo de aquél con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como forma de lograr una íntima compenetración del objeto litigioso.

Existe una estrecha relación entre el principio de inmediación y el de la oralidad, no obstante, ambos conceptos pueden diferenciarse. La oralidad, se refiere al medio de expresión que se utiliza en el proceso, mientras que la inmediación se refiere a la forma en que el juez toma en contacto o conocimiento del material de la causa, y con las partes.

Por el contrario, en los procedimientos predominantemente escrito, como el que actualmente rige en materia civil, la aplicación de este principio sufre importantes limitaciones, ya que si bien es cierto, que existen algunos medios de prueba que requieren la presencia del Juez, como es el caso de las testimoniales, y las inspecciones judiciales, tan bien es cierto, que la evacuación de las mismas, puede ser comisionado a otro juez de inferior instancia (sólo cuando es fuera de su jurisdicción territorial), con lo cual se desvanece la posibilidad de la inmediación. Asimismo, existe el temor de que el contacto vivencial del juez con las partes y los elementos objetivos del proceso, pueda afectar su imparcialidad.

A partir de la entrada en vigencia de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proceso moderno se orienta al acercamiento de la justicia al pueblo, siendo el principio de inmediación el medio más apropiado para lograrlo.

Así entendida, la ventaja de la inmediación es innegable, no existe otro instrumento más poderoso para la búsqueda de la verdad en el proceso. Vescovi (1984,75) recuerda citando a Klein, autor de la Ordenanza Austriaca, “que lo importante es que el juez y las partes, se miraran a los ojos”. De lo que se infiere, que tan importante es que el Juez vea y oiga a las partes, como que las partes vean y oigan a quien los juzga.

Por lo tanto, los caracteres del principio de inmediación serian: a) La presencia de los sujetos procesales ante el Juez; b) La falta de intermediario

judicial entre las partes y el juez; c) La identidad física del juez que está en contacto con las partes, y el que dictará la sentencia.

2. Identidad Física del Juez

Sánchez (2004, 54):

“El principio de identidad del juez requiere “que el juez del proceso oral esté constituido desde el comienzo del pleito hasta la decisión, por las mismas personas físicas. Claro está que la oralidad no podrá aplicarse si los actos procesales tienen lugar ante personas físicas diferentes, puesto que la impresión recibida por el juez que asiste a uno o más actos no puede infundirse en el otro que debe juzgar, y únicamente pudiera serle representada mediante la escritura, en cuyo caso el proceso, si fuere oral respecto al juez instructor, deviene escrito en cuanto al que sentencia.”

En el proceso esencialmente escrito, el juez que instruye la causa, es en la mayoría de los casos, quien dicta la sentencia definitiva, a pesar de que en el curso del procedimiento, se observa la delegación de ciertas actividades probatorias.

En los procesos laborales y penales, donde el procedimiento se encuentra dividido por diversas fases, en las cuales intervienen jueces distintos, tal es el caso en el procedimiento laboral, de la instrucción de la causa en primer lugar por el juez de mediación, conciliación y ejecución, el cual no es la misma persona física del juez de juicio.

En el caso de estos procedimientos especiales es importante destacar, que no resulta alterado el principio de identidad física del juez, ya que este principio que está íntimamente vinculado al derecho al juez natural, se refiere a que el juez que deba conocer de la causa o etapa procesal de que se trate, sea la misma persona física. Si por disposición legal, el procedimiento judicial de que se trate, prevé diversas fases con jueces distintos en cada una de ellas, esto no altera el principio de identidad física del Juez.

3. Concentración.

Se entiende este principio, como la agrupación en una misma audiencia o en varias próximas entre sí del debate de la causa, y su conclusión definitiva, a través de la sentencia definitiva.

Resulta característico del procedimiento oral, la concentración en una o pocas audiencias de la causa, en tal sentido, el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“La audiencia o debate oral podrá prolongarse por petición de cualquiera de las partes, hasta agotarse el debate en el mismo día, con la aprobación del Juez. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, el Juez deberá fijar otra dentro de los dos días siguientes para la continuación del debate, y así cuantas sean necesarias hasta agotarlo”.

La importancia de este principio en el proceso radica en que los procesos se resulten con mayor brevedad a menores costos, lo que implica también economía procesal.

4. Principios comunes a todo procedimiento

Existen algunos principios que rigen en todo procedimiento. El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, prevé el principio de la unidad de la jurisdicción, cuando establece, la jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la ley, se ejerce por los jueces ordinarios, quienes tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros.

El artículo 2 del señalado Código de Procedimiento Civil, prevé el de la inderogabilidad de la jurisdicción, cuando se trate sobre bienes muebles situados en el territorio de la República, o sobre otras materias que interesen al orden público o las buenas costumbres.

El artículo 10 del mismo Código Adjetivo, contiene el principio de la economía procesal, que significa, que la justicia se administre lo más brevemente posible.

Por otra parte, uno de los principios característicos del proceso civil, es el principio dispositivo, según el cual, en materia civil el juez no puede

iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.

Hay principios que más que postulados constituyen garantías constitucionales, uno de ellos es la igualdad, que encuentra regulación en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “Todas las personas son iguales ante la ley, (omissis)”.

El principio de la publicidad garantiza que cualquier persona, sea parte o no del proceso, pueda imponerse de las actuaciones del mismo, obteniendo sin autorización del juez, copia simple, tal como lo prevé el artículo 190 del Código Adjetivo Civil. El artículo 24 del Código de Procedimiento Civil, establece que los actos del proceso son públicos, pero se procederá a puertas cerradas, cuando así lo determine el Tribunal, por motivo de decencia pública.

B. Relación de los principios procesales y las etapas del procedimiento oral

Expone el profesor Cuenca (2000, 254):

“El proceso, como objeto del estudio de la ciencia procesal, está sometido a principios que regulan la actividad de los sujetos que intervienen en él. Aparte de los principios que en seguida exponemos, como método dialéctico para resolver contradicciones, el proceso está también sometido a reglas y principios de la lógica

formal (argumentos por vía de hipótesis, analogía, a contrario, a *fortiori*, *ad absurdum*, etc). Su mecanismo, desde el comienzo hasta su conclusión, obedece a un orden y su desarrollo a exigencia de principios.”

Los principios procesales, se manifiestan a lo largo de todas las etapas del proceso, algunos como el de la igualdad de las partes, la verdad procesal, dispositivo, y el de legalidad de las formas procesales resultan ordenadores del proceso, y están presentes en cada etapa, o fase del juicio. Otros, como la brevedad, derecho a la citación, y el de improrrogabilidad de los actos procesales o preclusión, regulan ciertas etapas del proceso, como la citación, la tempestividad de los actos procesales, los recursos, entre otros.

Otros principios como el de la oralidad y el de la escritura, determinan de una u otra forma, la expresión de los actos procesales, son contrapuestos entre sí, aunque existen diversos procedimientos, en los cuales coexisten, tal es el caso, del procedimiento oral, previsto en el Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO III

EL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO

A. Forma escrita del proceso.

En Venezuela, la forma de los actos procesales realizados por las partes, es en su mayoría, la escrita, salvo contadas excepciones en la que se permite la oral.

Por disposición del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, “Las partes harán sus solicitudes mediante diligencia escrita que extenderán en el expediente de la causa...”

Por otra parte, los actos que emanen del tribunal, deberán realizarse igualmente por escrito. En tal sentido, el artículo 188 ejusdem, prevé: “Los actos del Tribunal se realizarán también por escrito, bajo el dictado o las instrucciones del Juez, en términos claros, precisos y lacónicos”.

La forma escrita de los actos procesales, es para muchos, uno de los problemas que enfrenta actualmente el sistema procesal venezolano, ya que de ello deriva, la lentitud de los trámites que deben hacerse ante tribunales colapsados de causas, y escasos de personal humano, y de recursos tecnológicos.

B. Crisis del sistema. Causas y consecuencias.

Quiero comenzar este análisis con la cita de la crítica expuesta por el profesor Frank Petit (2004, 13), manifestó con certeza una crítica al actual sistema procesal venezolano, en la que expone:

“(En el procedimiento el tiempo es algo más que oro, es justicia). Está máxima expresada por el maestro uruguayo Eduardo Couture en el año 1937, recoge un sentir por la justicia, negada por la lentitud de los procesos, y que ya ingresado en el año dos mil, aún continúa válida, ante la ausencia de una respuesta válida. Continuamos con procesos exageradamente lentos. Y lamentablemente, hay que decir que, fruto de esa desesperante lentitud de los procesos, se convierte en válida aquella desgastada expresión de que una justicia lenta o tardía, es la negación de ella. Y es negación de ella porque la lentitud se constituye en fuente de corrupción.”

Procesos escritos exageradamente formalistas y lentos, ausencia de personal calificado que laboren como asistentes y auxiliares de justicia, falta de oportunidades para la preparación y capacitación de los jueces, hacinamiento de personal en las sedes judiciales, donde no funcionan los más básicos servicios, falta de recursos tecnológicos y equipos modernos que faciliten la labor diaria de los juzgados, son algunas de las causas de la crisis del sistema judicial venezolano.

A lo largo de los años, se han tomado algunas medidas para aliviar la crisis judicial, recordemos el Decreto de Reorganización del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, que dio lugar a un gran número de destituciones de jueces, y una “supuesta” modernización judicial, la cual quedó sólo en la mente de sus propulsores.

En Diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entre los sus significativos cambios, introdujo la oralidad como la forma en que se deben realizar los actos procesales. Esto significó un cambio de paradigma.

El nuevo texto Constitucional, sirvió de marco programático para la aprobación de la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, donde los tradicionales juicios escritos, fueron sustituidos por audiencias orales.

Los primeros pasos de la reforma en materia civil lo constituyen las Resoluciones 2006-00066 dictada el 18 de octubre del 2006, y la N° 2006-00038 de fecha 14 de junio de 2006, que ordenan la implementación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, a aquellas causas cuya cuantía no exceda de las Dos mil Novecientas Noventa y Nueve Unidades Tributarias. Siendo tribunales pilotos los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, y de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Los resultados de la implementación de la oralidad en materia civil, se encuentra con muchas trabas, una de ellas es la naturaleza misma del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, el cual se podría catalogar de mixto, ya que tiene una primera fase completamente escrita, y dos audiencias orales, de las cuales hay que dejar constancia escrita, lo que en definitiva se traduce en un juicio, lento y poco eficaz.

En este marco de ideas, cabe destacar la opinión del maestro Cuenca (2000, 252), que siguiendo a Chiovenda establece:

“Nuestro proceso civil carece de los cuatro principios que Chiovenda reclamaba como base para una buena administración de justicia. No existe oralidad sino en ciertos actos en que esta forma es facultativa de las partes y siempre sometida a la constancia por escrito, como hemos visto. Las partes no pueden comunicarse directamente entre sí, sino a través del tribunal, y entre el Juez y las partes la comunicación no es de viva voz sino por medio de escritos y diligencias, salvo el acto de informes en la instancia del que deben consignarse conclusiones escritas y el puramente oral de las aclaratorias verbales en casación. No existe identidad física del juez, porque a menudo los jueces confían a inferiores, con el carácter de comisionados, la sustanciación y ejecución de actos fundamentales del proceso como los relativos a la prueba. Tampoco seguimos el principio de concentración procesal, porque del juicio principal se desprenden, por vías de incidentes, causas pequeñas que estorban y entorpecen el curso de la causa principal, específicamente cuando se apela de decisiones interlocutorias de ejecución no urgente, en que el recurso debe ser oído en ambos efectos.”

Efectivamente, en el actual proceso civil se observan las deficiencias señaladas por el maestro Cuenca, las cuales promete remediar la oralidad, cuyo proceso enaltece los principios procesales de inmediación, concentración, identidad física del juez y publicidad.

CAPITULO IV

LA ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, PENALES Y DE TRÁNSITO TERRESTRE

A. Comparación de las etapas procesales en cada uno de estos procedimientos.

Los juicios laborales, y de tránsito terrestre, que se tramita por el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, se caracterizan por ser concebidos como procedimientos por audiencias, en los cuales se conjugan la escrita y la oralidad de los actos en diversas etapas procesales. En efecto, corresponden en forma escrita los actos de la demanda y la contestación, que son la primera etapa del proceso. Seguidamente, se realizan en forma oral, la audiencia preliminar, la fase probatoria, la audiencia de juicio, y la sentencia.

Se concibe como un proceso oral, pese a que algunos de sus actos se manifiestan en forma escrita, y las audiencias se documentan resumidamente en actas, además, los actos pueden ser grabados o digitalizados, por medio de los recursos técnicos que se cuente para ello.

Muy distinto a los anteriores es el procedimiento penal, y a los fines de observar las diferencias entre todos ellos, los estudiaremos separadamente en la forma siguiente:

a) **El Procedimiento penal:** Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal el 1º de julio de 1999, se produce en Venezuela un cambio radical en el funcionamiento de la justicia penal, ya que se abandona el sistema inquisitivo, previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal, y se pasa al sistema acusatorio. Este nuevo cuerpo normativo se basó en los principios de juicio previo y debido proceso, participación ciudadana, derecho a ser juzgado por los jueces naturales, presunción de inocencia, afirmación de la libertad, respeto a la dignidad humana, titularidad de la acción penal en cabeza del Ministerio Público, defensa e igualdad de las partes, publicidad, inmediación, concentración, contradicción, control de la constitucionalidad, y el que define la forma de los actos procesales: la oralidad.

Establece el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal (en lo sucesivo COPP): “El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas a la audiencia, conforme a las disposiciones de este Código”.

En este sentido, el procedimiento ordinario esta concebido en tres (03) fases. El Libro Segundo Título I del COPP, establece la Fase Preparatoria, que consiste en la preparación oral del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del Fiscal y la defensa del imputado (art. 280).

Esta fase del proceso, concluye o bien por la interposición de una querrela por parte de la víctima, o por la acusación del Ministerio Público, ambas ante el Juez de Control.

En el primer caso, la víctima sólo podrá querellar cuando se trate de delitos que la ley prescriba como de acción privada (art. 25), y deberá ser consignada por escrito ante el Juez de Control, el cual deberá contener: 1. Nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del querellante, y sus relaciones de parentesco con el querellado; 2. El nombre, apellido, edad, domicilio del querellado; 3. El delito que se le imputa, el lugar, día y hora de la perpetración; 4. Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho (art. 294).

En el segundo caso, la acusación la presentará el Ministerio Público ante el Juez de Control, sólo si estima que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado. (art. 326).

Presentada la acusación el Juez convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse en un plazo que no sea menor de diez, ni mayor de veinte días. (art. 327). Toda la audiencia se celebrará en forma oral.

En caso de que el Juez admita la acusación, y ordene la apertura a juicio, es que se celebra la audiencia de juicio, ante un juez distinto, denominado juez de juicio. Esta audiencia es predominantemente oral.

b) **El procedimiento Laboral:** La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece la oralidad como principio vertebral del proceso que se materializa a través de las Audiencias Preliminar y de Juicio. Además de ello, las actuaciones orales de las partes, se evidencian también, en la sustanciación de los recursos de apelación, casación y de control de la legalidad.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo sucesivo (LOPT), organiza los circuitos judiciales en dos instancias (art. 15), una primera instancia, integrada por dos jueces independientes en sus funciones propias y específicas, el primero, denominado Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo, que dirigirá la Audiencia Preliminar y, el segundo, Juez de Juicio, que presidirá Audiencia de Juicio.

La Audiencia Preliminar, caracteriza la fase de sustanciación del proceso, en ella se procura un modo de auto-composición procesal del conflicto. Si hay lugar a conciliación o arbitraje, la función mediadora del juez resultó exitosa.

La Audiencia de Juicio, es el momento estelar del proceso, consiste en la realización oral del debate procesal entre las partes, y se incorporan las pruebas.

La segunda instancia, estará integrada por los Tribunales Superiores del Trabajo, que podrán ser colegiados o unipersonales (art. 19).

Como última instancia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conocerá de las sentencias recurribles en casación (art.167) y de las solicitudes para ejercer el Control de la Legalidad (art. 178).

La nueva ley adjetiva dispone expresamente la utilización de los siguientes principios: uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, celeridad, gratuidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. Del análisis de la nueva ley se observa, la oralidad consagrada a lo largo de todo el proceso, pese a que de casi todos los actos procesales, se deja constancia escrita.

Existen algunas actuaciones puramente orales, tales son los casos de: a) la tacha de instrumentos, cuya falsedad debe proponerse en la audiencia de juicio de forma oral, mediante una exposición de hechos y motivos, ante lo cual el juez decide, de forma oral; b) el interrogatorio de los testigos en la audiencia de juicio, a quienes el juez tiene derecho de interrogar, no siendo necesario que tal interrogatorio conste detalladamente en un acta, entre otros.

La forma escrita de los actos procesales, también se hace presente en diligencias, escritos o en actos del tribunal como la sentencias interlocutorias y definitivas.

c) **El procedimiento de Tránsito Terrestre:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Tránsito Terrestre: “El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se haya ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de los daños”.

El procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, ha sido ampliamente analizado en el Capítulo I de la presente investigación, sin embargo, del mismo podemos extraer como similitudes a los procedimientos laboral y penal, la composición mixta del juicio, el cual no es netamente oral, ni puramente escrito.

Los actos son predominantemente orales, aunque en mayor o menor medida se exija la constancia escrita.

B. Ventajas y desventajas de la oralidad en estos procedimientos

Ventajas

a) La inmediación. Desde el inicio hasta el final de la etapa procesal que se trate, el juicio lo conoce el mismo juez, esto se traduce en un contacto directo entre el Juez y las partes que permite, primero, que

el juez perciba cualquier signo de falsedad o engaño derivado de la actitud de las partes, segundo, la palabra hablada tiene la característica de la fatalidad, lo dicho no puede recogerse, por lo tanto, los abogados tendrán que esforzarse en preparar mejor los juicios, a los fines de que sus exposiciones y pruebas, sean lo suficientemente convincentes de sus alegatos.

- b) Se garantiza la publicidad de los actos procesales. Todas las audiencias son públicas, a excepción de la celebrada en el procedimiento laboral, ante el juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución.
- c) Celeridad y economía procesal. Los juicios orales son más breves que los escritos, y en general presentan menos incidentes, ya que se concentran diversos actos en una misma audiencia.
- d) Enaltece el principio del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, consagrado constitucionalmente.

Desventajas

Más que desventajas, los juicios orales presentan inconvenientes operativos, tales como, la carencia de las salas de audiencias suficientes, y de recursos humanos y técnicos.

Además, hay que señalar como desventaja, la falta de preparación académica, y de formación técnica de los abogados y jueces que serán los protagonistas.

CAPITULO V

EL JUEZ Y EL PROCEDIMIENTO ORAL

A. Principio de Imparcialidad y Discrecionalidad

Para analizar estos principios, resulta indispensable partir de la noción del debido proceso, que se erige en nuestro sistema jurídico como un principio garante de los derechos fundamentales. Esta garantía, considerada como norma *jus cogens* de Derecho Internacional, deviene no sólo en la necesidad de que el juez que ha de conocer un proceso sea imparcial, sino que por demás sea independiente, competente y que haya sido predeterminado por la Ley.

Estas garantías constitucionales se integran a nuestro sistema jurídico por las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. En específico el artículo 8, inciso 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra en su catálogo de garantías judiciales que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter”.

De igual forma nuestra Constitución expresa, en su artículo 26, segundo párrafo: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible,

imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos inútiles”.

Estas expresiones sustanciales adquieren mayor cuantía cuando logramos vincularlas con la finalidad principal de nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, consistente en la protección efectiva de los derechos de la persona humana, pues de no ser así, morirían por inanición. La validez inmediata de la norma jurídica se apoya en la idea de su garantía. Garantías, que no son derogables ni disponibles”, por lo que es juez está atado a ellas, como fuente primigenia de sus decisiones, en todo su arbitrio judicial.

Como es bien sabido, los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos tienen carácter vinculante entre nosotros, en aplicación estricta de lo contenido en el artículo 23 de la Constitución, que constituye la puerta de entrada a estas garantías en nuestro sistema jurídico.

De las normas internacionales y nacionales citadas deriva que la efectiva independencia del poder judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general siendo ésta, junto a la garantía de imparcialidad, elemento esencial del debido proceso legal, vulnerándose este último con la ausencia de alguna de estas garantías, así como también cuando existen indicios de que alguna se puede ver

comprometida. Esto implica que el juzgador al momento de conocer el proceso, no puede encontrarse atado a ningún vínculo que obligue o comprometa su imparcialidad. En otras palabras, tiene como único límite a sus decisiones las reglas de argumentación jurídica, no quedando subordinado a ninguna autoridad o jurisdicción.

Entre la imparcialidad y la independencia existen diferencias fundamentales que consideramos necesario aclarar. Un juez puede ser independiente, en la medida en que se encuentra libre de subordinación en cuanto a sus decisiones, sin embargo puede estar parcializado con una de las partes que intervienen en el proceso. La independencia es un presupuesto de la imparcialidad en tanto despliega su eficacia en un momento previo al ejercicio de la función jurisdiccional, mientras que la imparcialidad tiene lugar durante el desarrollo de dicha función.

Tal cual hemos establecido, nuestra legislación reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, recordando que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional.

Esta obligación de no ser juez y parte, ni juez de la propia causa se traduce en dos reglas; según la primera, el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; por la segunda, el juez no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho

que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en contra de una o algunas de las partes que intervienen en el proceso.

Para garantizar las apariencias de imparcialidad exigidas y reparar de forma preventiva las sospechas de parcialidad, las partes gozan del derecho a recusar a aquellos jueces en quienes estimen que concurren las causas legalmente tipificadas como circunstancias de privación de la idoneidad subjetiva o de las condiciones de imparcialidad y neutralidad. Igualmente, los jueces tienen la potestad de inhibirse como medio de prevención a una eventual recusación por parte de los actores que intervienen en el proceso.

Este derecho a formular recusaciones comprende, en línea de principio, la necesidad de que la pretensión formulada se sustancie a través del proceso prevenido por la Ley con este fin y que la cuestión así propuesta no sea enjuiciada por los mismos jueces objeto de recusación, sino por aquellos otros a que la Ley defiera el examen de la cuestión.

La regla general es, así pues, la de que el órgano recusado ha de dar curso a la recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquél de quien se sospecha la parcialidad.

Los motivos que las partes pueden oponer al momento de presentar la reacusación están contenidos en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 82. Estos motivos son los mismos que los jueces pueden hacer valer, previo una decisión motivada, para su inhabilitación.

Estas prerrogativas de recurso que se ponen en las manos de las partes que intervienen en el proceso, constituyen el núcleo esencial del derecho fundamental que tiene el ciudadano de acceder a la justicia en condiciones de *igualdad* y ante un juez que se muestre objetivo e imparcial.

Por otra parte, la discrecionalidad del Juez implica, que aún cuando este juzga de acuerdo al conocimiento del caso y de las normas que regulan la materia, las cuales debe interpretar no en base a su libre arbitrio, sino con razonabilidad y racionalidad, de manera que la decisión derive de una adecuada motivación, o como afirma Yrureta (2007, 214): “En este plano la discrecionalidad del juez deriva de una norma jurídica que se la confiere en el caso concreto y le fija los límites de su ejercicio”.

A manera de conclusión, las garantías constitucionales del debido proceso, en este caso la imparcialidad, constituyen límites al eventual ejercicio arbitrario de administración de justicia de nuestros tribunales, que se fortalece con la obligación de los jueces de dictar sentencias motivadas, respetar el derecho a la igualdad y el principio de legalidad.

B. Potestades del Juez

Resulta necesario al momento de identificar los poderes del juez, realizar una distinción entre los poderes jurisdiccionales y los poderes procesales.

Entre los primeros, deriva el poder del Juez de: a) Administrar justicia; b) Dictar sentencia; c) Establecer la *quaestio iuris*; d) Establecer la *quaestio facti*; e) Aplicar las Máximas de Experiencia, los cuales analizamos de la siguiente manera:

La formación de la sociedad moderna, y el control de los actos realizados por los sujetos hace necesaria la función jurisdiccional, la cual, evita, que los conflictos intersubjetivos que surjan sean resueltos, de mano propia por los afectados, sin seguir ninguna regla o norma de conducta, e imponiendo castigos o sanciones no previstos en ninguna ley. Esto hace necesario, que los conflictos sean tratados en instancias especialmente creadas para la admisión, sustanciación y resolución de estos conflictos, mediante la aplicación de normas generales de conducta, obligatorias para todo el conglomerado.

El poder de administrar justicia deriva de la naturaleza de la función jurisdiccional definida como el poder de tutela del derecho de acción ejercido por el titular del derecho subjetivo controvertido, mediante la cual se le da respuesta a la pretensión propuesta, mediante un acto que acoge o niega la pretensión y da origen al proceso.

Cuando el Juez dicta sentencia, satisface la función jurisdiccional. Para Rengel Romberg (2006, 174):” El deber del juez de “*Administrar justicia*” ha de entenderse, pues, en el sentido amplio de *Poder Jurisdiccional*, que tiene un desarrollo mediante *poderes procesales* que conducen finalmente al poder de decisión de la causa (la sentencia). Por tanto, es evidente que la Administración de Justicia se concreta, en definitiva, en el dictado de la sentencia que pone fin a la controversia y da satisfacción al derecho de acción, al acoger o negar la pretensión que se promueve en la demanda y da origen al proceso”.

En el análisis del caso concreto, y la creación de la norma jurídica individual en que consiste la esencia de la función jurisdiccional, el juez basa su conocimiento en dos grandes cuestiones, la de derecho y la de hecho.

La primera tiene que ver con las normas generales preexistentes que forman el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda, se relaciona con el hecho concreto que se ventila en la controversia. Con ambas se construye la sentencia.

El jurista colombiano Escandía (1997, 420), define la sentencia como:

“(...) el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o de fondo del demandado.

Mediante la sentencia se convierte para cada caso, en voluntad concreta, la voluntad abstracta del legislador que la ley contiene”.

Para el maestro Uruguayo Eduardo Couture (2002, 227):

“La actividad del hombre, en este caso el juez, consiste en una serie de actitudes personales que le son impuestas por el deber profesional y que él cumple en el desempeño de su misión oficial. Estas actitudes pueden ser examinadas con prescindencia de su contenido. En este primer sentido, la sentencia es considerada un hecho humano”.

Estas dos definiciones, ubican a la sentencia como un acto de creación del juez, que como órgano del Estado, está llamado a cumplir la función jurisdiccional. En toda sentencia, está presente un juicio de razonamiento basado en los argumentos expuestos por las partes, de un lado, y del otro, el ordenamiento jurídico positivo a aplicar, lo cual se logra por medio de la aplicación del silogismo jurídico.

Los poderes procesales del juez se encuentran, a) La Dirección y gobierno del proceso; b) Sustanciación o instrucción de la causa; c) La facultad de llamar a conciliación a las partes; d) Dictar autos para mejor proveer; e) Ejecutar las sentencias.

C. Responsabilidades del Juez

En Venezuela, la responsabilidad civil se aplica a los Jueces, y al Árbitro que sin causa legítima se separe de su cargo. Esta responsabilidad tiene su fundamento en la Constitución.

El artículo 139 de la norma suprema dispone: “El Ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder; o por violación de esta Constitución y la ley”.

El artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Los funcionarios judiciales son responsables conforme a la ley de las faltas y delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones”.

Existen tres tipos de responsabilidad judicial:

a) La responsabilidad civil: que es la de una acción civil, cuyo objeto es el resarcimiento de los daños causados por el funcionario en el ejercicio de sus funciones. En nuestro país, se circunscribe al Recurso de Queja.

En opinión de Rengel Romberg (2006, 256):

“Es evidente que esta acción no está dirigida a obtener la reforma o anulación de la sentencia; con ella la parte perjudicada demanda el *“resarcimiento de los daños que le ha ocasionado el juez”*, no la reparación de la sentencia pronunciada por el mismo juez; sentencia ésta que es dejada aparte, y conserva su valor a pesar de que la acción civil sea acogida”

b) La responsabilidad penal: que surge por acción u omisión dolosa o culposa del juez o Magistrado, en ejercicio de la función jurisdiccional.

c) La responsabilidad disciplinaria: que consiste en la obligación que tienen los jueces de responder por su mal conducta o desempeño, en el ejercicio de sus cargos.

CAPITULO VI

LA ORALIDAD COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL RETARDO PROCESAL

A. Análisis de las Resoluciones No. 00038 dictada 14 de junio del 2006, No. 2006-00066 del 18 de octubre del 2006, y el Acuerdo de la Sala Civil dictado el 15 de marzo del 2007.

Mediante Resolución No. 2066-00038 dictada el 14 de junio del 2006, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se acordó la aplicación del procedimiento oral contenido en el Título XI, de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, en todas las materias que prevé el artículo 859 del mencionado código adjetivo, a excepción de las establecidas en el ordinal segundo del mencionado artículo, siempre que el interés principal de la demanda no exceda en bolívares, al equivalente a dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 UT), la cual entraría en vigencia a partir del 15 de octubre del 2006.

Posteriormente, fue dictada el 18 de octubre del 2006 la Resolución No. 2006-00066, mediante la cual se acordó en los mismos términos de la resolución anterior, la aplicación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, pero con entrada en vigencia a partir del día 1 de marzo del 2007.

Llegada la fecha de entrada en vigencia de la resolución, los tribunales procedieron a aplicarla en todo su contenido hasta el día 15 de marzo del 2007, fecha en la cual fue dictado el Acuerdo de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el cual modificó los términos de las Resoluciones de la Sala Plena, e interpreto que:

“...esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus facultades orientadoras relacionadas con la materia de su competencia y en razón de que la Resolución N° 2006-00038 de fecha 14 de junio de 2006, diferida por la Resolución N° 200600066, de fecha 18 de octubre de 2006, atinente a la implementación de los juicios orales, ha sido objeto de interpretaciones disímiles generadoras por la cuantía, informa a todos los Jueces de los Tribunales pilotos de Municipio y de Primera Instancia Civil Mercantil del Área Metropolitana de Caracas y del estado Zulia con sede en Maracaibo, lo siguiente: Las normas contenidas en la Resolución vigente deben ser interpretadas de manera sistemática y concatenadas entre si, por ello, el artículo 1° de la mencionada resolución, es inherente y no puede aislarse del contenido del artículo 5 ejúsdem. En tal sentido, la competencia por la cuantía a la cual hace referencia el artículo 1 de la Resolución, solo comprende a aquellas causas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral previsto en el artículo 859 del código de procedimiento civil, el cual señala: ‘...Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas, siempre que su interés calculado según el título I del Libro Primero de este Código, no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares.

1. Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Código...’.

Lo cual determina que las materias excluidas de la aplicación del procedimiento oral en el referido artículo 859, no están comprendidas en el cambio de competencia por la cuantía, sino que se rigen por aquellas normas y regulaciones vigentes. Bajo estos principios queda establecido, hasta tanto se resuelva

aclarar o ampliar por vía de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, que los tribunales de primera instancia conservan su competencia por la materia, territorio y cuantía para conocer de las causas, salvo aquellas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral”.

Quedo así establecido los límites de la aplicación del procedimiento oral, en los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Ahora bien, observamos que la razón de la aplicación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, obedece, según las resoluciones mencionadas, al acatamiento de lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia reunidos en Sala Plena, consideraron: “Que el legislador procesal civil estableció un mecanismo para la tramitación del juicio oral en el procedimiento civil contenido en el Título XI, de la Parte Primera, del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil”, procedimiento éste que ordenaron aplicar en todas aquellas materias previstas en el artículo 859 a excepción de las establecidas en el ordinal segundo de dicho artículo, de lo cual derivan varias consideraciones:

La primera, está relacionada con la naturaleza del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, ampliamente desarrollado en el Capítulo I de la presente investigación. Hemos visto, que el procedimiento oral contenido en el Código Adjetivo Civil se tramita en lo que podríamos llamar tres fases, claramente diferenciadas, en la primera, tiene lugar la consignación del escrito libelar ante el secretaría del juzgado, la admisión, la citación, y la contestación de la demanda, con lo cual se traba la litis. Procede inmediatamente una segunda fase, compuesta por la audiencia preliminar, en la que las partes expresan si convienen en algunos de los hechos, y el tribunal fija los límites de la controversia. En esta audiencia deberán promoverse todas las pruebas que consideren las partes, en este caso, si fueren promovidas inspecciones y experticias, el tribunal ordenará evacuarlas dentro de un plazo que no exceda el ordinario. Finalmente tiene lugar, la tercera fase del juicio, que es la audiencia o debate oral en el que luego de la exposición de las partes, la evacuación de las testimoniales y posiciones juradas, y finalmente la sentencia.

Resulta evidente que se trata de un procedimiento en su primera fase escrito, en su segunda mixto (se conjuga la oralidad y la escritura), y finalmente oral. No es propiamente un procedimiento oral, sino uno que contiene dos audiencias orales.

Luego, ordena el precepto constitucional que el proceso debe ser breve. Si contamos todos los lapsos que contiene el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, desde la admisión de la demanda hasta la publicación de la sentencia, transcurren setenta y un (71) días de despacho.

Ahora bien, si contamos todos los lapsos procesales que contiene el juicio ordinario escrito previsto en el Código de Procedimiento Civil, desde la admisión hasta la sentencia, transcurren setenta y tres (73) días de despacho, esto sin contar las incidencias que surjan en el proceso. Cabe preguntarse ¿Es el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, un procedimiento breve?, yo creo que si, y esto porque aunque se toma prácticamente el mismo tiempo llegar a sentencia definitiva en el procedimiento escrito, que a la audiencia de juicio en el oral, la ventaja de la oralidad radica en que una vez fijada la fecha de la audiencia, se concentran en ella varios actos procesales, lo cual, sin lugar a dudas, se traduce en brevedad y economía procesal. Cabe destacar, que la gran mayoría de los casos que cursan ante los tribunales, el lapso para dictar sentencia, se difiere una vez, siendo escasos los casos resueltos dentro del lapso.

Una segunda consideración tiene que ver con las materias sobre las cuales será aplicado el procedimiento oral. De acuerdo a las Resoluciones, son las previstas en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, a excepción de la prevista en el ordinal segundo. Establece la norma en comento:

“Artículo 859: Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas, siempre que su interés calculado según el Título I del Libro Primero de este Código, no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares.

1º Las que versen sobre el derecho de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Código.

2º Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y las demandas por accidentes de trabajo.

3º las demandas de tránsito.

4º Las demás que por disposición de la ley o por convenio de los particulares, deban tramitarse por el procedimiento oral”.

De acuerdo a lo previsto en la norma citada, el interés principal de la causa, no debe exceder la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00), o lo que es igual a Doscientos cincuenta (250) bolívares fuertes, cuantía que fue modificada, ordenándose la tramitación por el procedimiento oral de las causas comprendidas en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, cuyo interés principal no exceda las 2.999 UT.

De acuerdo a lo establecido en el ordinal 1º de la norma en comento, se tramitan por el procedimiento oral, aquellas causas que no tengan previsto un procedimiento especial, a saber:

Los procedimientos especiales previstos en la parte primera del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil.

1º Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento espacial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

Estos procedimientos son los que abarcan los artículos 608 al 946 del Código, y se refieren a los procedimientos especiales contenciosos, y en la parte segunda, los que se refieren a la jurisdicción voluntaria. Se hallan incluidos, dentro de la parte primera del Libro Cuarto, el arbitramento, la vía ejecutiva, el procedimiento por intimación, la ejecución de créditos fiscales, la ejecución de hipoteca, la ejecución de prenda, el juicio de cuentas, los juicios sobre la propiedad y la posesión, los interdictos, los procedimientos relativos a los derechos de familia y al estado de las personas, los procedimientos relativos a sucesiones hereditarias, el retardo perjudicial, la oferta real y depósito, el recurso de queja, el exequatur.

Aplicando el criterio de la especialidad podemos afirmar que se pueden tramitar por el procedimiento oral los casos de créditos u obligaciones patrimoniales, que no encuentren como limitante: a) Que tengan un procedimiento especial contencioso; b) Que el valor de la demanda exceda el límite establecido.

Conciliación, arbitraje y los procedimientos laborales

En el ordinal segundo del artículo 859 se establece:

2º Los asuntos contenciosos que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y las demandas por accidentes de trabajo.

Con la entrada en vigencia de la actual ley Orgánica del Trabajo, se le asignó a los tribunales del trabajo, la competencia de estabilidad laboral, que implica todos los casos de calificación y despido del trabajador, así como el reenganche y pagos de salarios caídos, que atendían las Comisiones Tripartitas (Artículo 656 de la Ley Orgánica del Trabajo).

En el artículo 655 de la LOT, se establece que los asuntos contenciosos del trabajo, cuyo conocimiento, sustanciación y decisión no hayan sido atribuidos a la conciliación o al arbitraje o a las Inspectorías del Trabajo, deberán tramitarse por ante los tribunales de Municipio en Primera Instancia sobre asuntos de cualquier cuantía en la jurisdicción donde no existan tribunales especializados.

De la decisión del tribunal conocerá en apelación el tribunal de Primera Instancia del Trabajo. Dichas decisiones no tienen casación.

En cuanto a los procedimientos de conciliación y arbitraje, los artículos 479 y siguientes de la LOT, asigna competencia exclusiva a los tribunales del trabajo.

Indica expresamente el ordinal 2º del artículo 859 del CPC, que se podrán tramitar por el procedimiento oral, las demandas que tengan por objeto los accidentes de trabajo, que son aquellos reconocidos como propios del trabajo.

Las demandas de tránsito

En el ordinal tercero, se establecen las demandas de tránsito.

La Ley de Tránsito Terrestre en su artículo 150 establece: “El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se haya ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la Responsabilidad de los Daños”.

El ordinal 4, ordenar tramitar por el procedimiento oral, las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los particulares, deban tramitarse por el procedimiento oral, entre ellas se encuentran:

- a) Código de Comercio: El juicio verbal para decidir objeciones a las calificaciones de los créditos (artículo 962).
- b) Código de Comercio, las quiebras de menor cuantía (arts. 1075 y 1079).
- c) Código Orgánico Procesal Penal, los juicios de índole penal
- d) En la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se establece un procedimiento oral y público (artículo 99), entre otros.

También establece el ordinal 4º que se tramitaran por el procedimiento oral aquellas que las partes hayan convenido tramitarlas por esta especial vía.

De lo anterior deriva que la aplicación del procedimiento oral, queda reducida a un mínimo de causas, con lo cual se podría decir, que la entrada en vigencia de las Resoluciones de la Sala Plena, eliminan el procedimiento ordinario, pero dejan vigente todo el catálogo de procedimientos especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, y en las leyes especiales, con lo cual, no se está estableciendo un verdadero procedimiento oral, ni se está procurando cumplir el mandato establecido en el artículo 257 de la Constitución.

No cabe duda que la intención de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, procuran un cambio de paradigma en los tribunales, y sentar las bases para formar un nuevo y mejor poder judicial, sin embargo, aunque la herramienta de la oralidad es valiosa y la más efectiva, la manera en que está concebida en el Código de Procedimiento Civil, no ayuda a cumplir las metas propuestas, por ello, considero que la forma más apropiada para la implementación de la oralidad en materia civil, es por medio de una Reforma Legislativa.

B. La oralidad como solución al problema del retardo procesal

Hemos visto, a lo largo de la presente investigación monográfica, que la oralidad entendida como forma de expresión de la palabra, así como, principio procesal, ha sido adoptada desde antaño por gran cantidad de países, donde la dinámica de los pueblos, de sus gobiernos y su cultura ha ido modificando la concepción de la oralidad, algunas veces para admitirla como principio general de sus sistemas, y otras para negarla.

En nuestro país, la oralidad ha estado siempre presente en nuestro sistema positivo, lamentablemente no como principio rector del proceso.

No fue sino hasta la aprobación de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando la realidad impuso y justificó un cambio de paradigma, ya que desde hace más de veinte años Venezuela vive una realidad procesal, caracterizada por la lentitud de los procesos, retardos, corrupción, falta de una justicia oportuna, eficaz, expedita, aunado a una imperante carencia de políticas judiciales efectivas que resuelvan la grave situación judicial que nos aqueja.

Para muchos analistas la lentitud de los procesos, es el resultado de juicios largos, y excesivamente formalistas, así como de la falta de adiestramiento y capacitación de jueces, asistentes, y de abogados litigantes, todos obligados a trabajar en sedes inadecuadas.

Sin embargo, la solución de este grave conflicto resulta compleja. Amerita no sólo el cambio de los actuales procedimientos, sino de las políticas que afectan al Poder Judicial. Resultan necesarias muchas herramientas, y la oralidad, es sólo una de ellas.

Es un principio que involucra además a otros como el de la intermediación, la concentración y la publicidad, la efectiva aplicación de todos ellos, conllevaría a una verdadera justicia.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución: “El proceso es el medio para la realización de la justicia”. En aras de este ideal, se han propuesto varias reformas, una de las más significativas, esta contenida en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la aplicación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Esto representa un paso importante y positivo, pero una verdadera reforma procesal debe nacer por vía legislativa. Se debe contemplar un texto normativo que contengan las bases y principios generales de un verdadero procedimiento oral, tal como está previsto en otras materias como la laboral, la penal, y la de protección del niño y del adolescente.

Un proceso que aunque contenga elementos orales, no contribuya a mejorar la realidad de los tribunales, no es efectivo, el verdadero proceso moderno debe ser oral, breve y público, de tal manera que se garantice un verdadero acceso a la justicia y una respuesta oportuna. Concluyo con la máxima expresada por el maestro uruguayo Eduardo Couture: *“En el procedimiento el tiempo es algo más que oro, es justicia”*.

CONCLUSIONES

La noción de oralidad refiere a una forma de comunicación por medio del habla. Fue adoptada como principio procesal, según el cual las partes manifiestan sus expresiones de viva voz, ante el juez o jurado.

Constituye junto a la escritura, formas de expresión del proceso. Así, dada la complejidad de las relaciones patrimoniales de los particulares entre sí y con el Estado, no es posible concebir un proceso exclusivamente oral o escrito. Hoy en día, toda controversia judicial es hablada y escrita y por tanto mixta, sin embargo, su naturaleza la define la prevalencia de una forma sobre la otra.

En nuestro país, el proceso ha sido tradicionalmente escrito, aunque con algunas manifestaciones orales, generalmente limitadas a las pruebas o a procedimiento especiales de mínima cuantía.

Esto, aunado a la rigidez del principio dispositivo, las excesivas formas procesales, y la incapacidad del personal judicial, ha dado como resultado un sistema judicial caracterizado por los retardos, corrupción y la falta de una justicia oportuna, eficaz y expedita.

A lo largo de los años, las máximas autoridades judiciales del país han tratado de adoptar medidas para mejorar la crisis judicial, sin éxito. Sin embargo, en el año de 1999, se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 257, establece que el proceso debe ser breve, oral y público, a los fines de alcanzar su finalidad que es la justicia.

Mediante Resolución No. 2066-00038 dictada el 14 de junio del 2006, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se acordó la aplicación del procedimiento oral contenido en el Título XI, de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, en todas las materias que prevé el artículo 859 del mencionado código adjetivo, a excepción de las establecidas en el ordinal segundo del mencionado artículo, siempre que el interés principal de la demanda no exceda en bolívares, al equivalente a dos mil novecientos noventa y nueve unidades tributarias (2.999 UT), la cual entraría en vigencia a partir del 15 de octubre del 2006.

Posteriormente, fue dictada el 18 de octubre del 2006 la Resolución No. 2006-00066, mediante la cual se acordó en los mismos términos de la resolución anterior, la aplicación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, pero con entrada en vigencia a partir del día 1 de marzo del 2007.

Llegada la fecha de entrada en vigencia de la resolución, los tribunales procedieron a aplicarla en todo su contenido hasta el día 15 de marzo del 2007, fecha en la cual fue dictado el Acuerdo de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el cual modificó los términos de las Resoluciones de la Sala Plena.

Este cambio, implica la aplicación del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, a todas las causas que según la materia y cuantía están previstas en la resolución.

Aunque, el cambio de paradigma que ofrece nuestro Máximo Tribunal, resulta positivo, cabe destacar que el procedimiento que se ordena aplicar se trata de uno que contiene una primera fase escrita, que sería la de instrucción de la causa, que comienza con la interposición del libelo de la demanda, y termina con la contestación a la misma. Una segunda fase mixta (oral y escrita), en la cual se desarrolla la audiencia preliminar, de la cual queda constancia en acta, en la que el juez fija los límites de la controversia y las partes promueven las pruebas, y finalmente, la audiencia de juicio oral que concluye con la sentencia.

Hemos analizado en profundidad este procedimiento, y contra él podemos señalar que las materias sobre las cuales se aplicaría efectivamente, son casi inexistentes, dado que casi todo lo previsto en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, posee una ley especial, por lo que su aplicación no es efectiva.

Luego, la brevedad del juicio radica en que se pueden concentrar en una misma audiencia, varios actos procesales. Sin embargo, sólo si cuenta con salas de audiencia adecuadas, y de personal judicial suficiente y preparado, es que se podrán evidenciar verdaderas mejoras en este sentido. Dichos cambios no han sido implementados.

Considero que la solución al problema del retardo procesal, es compleja. Amerita no solo el cambio de los actuales procedimientos sino de las políticas que afectan al poder judicial, la oralidad es una de ellas.

Es un principio que involucra además a otros como el de la intermediación, la concentración y a publicidad, sólo con la efectiva aplicación de todos ellos, lograríamos una garantizada en un proceso debido.

Esta garantía del debido proceso, considerada como norma *jus cogens* del Derecho Internacional, deviene no sólo en la necesidad de que el juez que ha de conocer del juicio sea imparcial, sino que por demás sea independiente, competente y que haya sido predeterminado por la ley.

El juez como funcionario encargado de ejercer la función jurisdiccional goza de ciertas garantías y poderes, sin embargo entre sus responsabilidades más importantes está de dictar sentencia ajustada a derecho.

Ante todo esto, la misión de la aplicación del procedimiento oral es el efectivo cumplimiento del mandato constitucional de lograr una justicia breve, oral y pública, y su visión es que sea una verdadera satisfacción de la función jurisdiccional, que no es sólo dar respuesta a los conflictos intersubjetivos surgidos entre los particulares entre sí, y entre éstos y el Estado, sino que lograr una verdadera justicia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Azuaje, M., y Ruiz, G. (2007). Axiología Crítica del Proceso Oral. **Memoria del VII Congreso Venezolano de Derecho Procesal**. (pp.185-202). San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira.
- Berro, J. (2007). La Oralidad en el Proceso Penal en Venezuela. Praxis Forense y su contenido social. **Memoria del VII Congreso Venezolano de Derecho Procesal**. (pp.411-420). San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira.
- Bonet, N (2006). Evaluación de la Oralidad en el Proceso Civil Español. **Memoria del VI Congreso Venezolano de Derecho Procesal**. (pp.13-72). San Cristóbal. Universidad Católica del Táchira.
- Cappelletti, M. (1973). **El proceso civil en el derecho comparado**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Chiovenda, G. (1997). **Curso de Derecho Procesal Civil**. Biblioteca Clásicos del Derecho. Volumen 6. México D.F. Editorial Mexicana.
- Código de Procedimiento Civil de Venezuela. (1986). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 4.209 (Extraordinario), Septiembre 18 de 1990.
- Código Orgánico Procesal Penal. (2001). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 5.558, Noviembre 14 de 2001.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 5453 (Extraordinario), Marzo 24 de 2000.

Couture, E. (2002). **Fundamentos del Derecho Procesal Civil**. (4^{ta}. ed). Buenos Aires: Editorial B de F.

Couture, E. (1937). **Proyecto de Código de Procedimiento Civil**.

Cuenca, H. (2001). **Derecho Procesal Civil**. Caracas: Ediciones de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela.

Cuenca, L. (2004). **Las cuestiones previas en el Procedimiento Civil Ordinario**. San Cristóbal. Editorial Jurídica Santana C.A.

Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. (2001). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 37.332, Noviembre 26 de 2001.

Devis Echandía, H (1997). **Teoría General del Proceso**. Buenos Aires. Editorial Universidad.

Ley de Procedimiento Marítimo, **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela** N° 5.554 (Extraordinario), noviembre 13 de 2001.

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela** N° 37.332, Noviembre 26 de 2001.

Ley de Tierras y desarrollo Agrario, **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela** N° 37.323, Noviembre 13 de 2001.

Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente, **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela** N° 5.266 (Extraordinaria), Octubre 2, 1998.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (2002). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 37.504, Agosto 13 de 2002.

Mélich, J. (2006). **La prescripción extintiva y la caducidad**. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Miliani, A (2007). **El Juicio Oral**. Caracas. Editorial Mobilibros.

Molina, R. (2007). Los riesgos de la oralidad en el sistema procesal venezolano. **Memoria del VII Congreso Venezolano de Derecho Procesal**. (pp.183-184). San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira.

Morillo, A. (2001). **El proceso civil moderno**. La Plata: Librería Editorial Platense.

Ortiz, R. (2003). **Teoría General del Proceso**. Caracas: Editorial Frónesis.

Parra, F. (Comp). (2005). **Temas de Derecho Procesal**. Caracas: Colección de Estudios Jurídicos N° 15.

Petit, F. (2004). **El proceso civil oral en Venezuela**. Caracas: Ediciones Liber.

Petit, F. (2007). **La oralidad civil**. Caracas: Editorial Binev.

Picó i Junoy (2002). ***Las garantías constitucionales del proceso.*** Barcelona. Ediciones José María Bosch.

Rengel-Romberg, A. (1995). ***Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano.*** (5^{ta}. ed). Caracas: Editorial Arte.

Rengel- Romberg, A (2006). ***La profesionalización de los Jueces.*** Caracas: Editorial Altolitho C.A.

Sánchez, A. (2004). ***El principio de oralidad en los procedimientos civil y de protección del niño y del adolescente.*** Caracas: Ediciones Paredes.

Sánchez, A (2001). ***Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos.*** Caracas: Ediciones Paredes.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2005). ***Manual de Trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales.*** (3^a. ed). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Velandia, R. (2002). El principio de la oralidad en el proceso civil: Su relación con la lingüística, la psicología jurídica y los procesos del área social. ***Estudios de Derecho Procesal Civil. Libro Homenaje a Humberto Cuenca.*** (pp. 921-952). Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Libros Homenaje No. 06. Caracas: Fernando Parra Aranguren Editor.

Véscovi, E (1984). ***Teoría General del Proceso.*** Bogotá: Editorial Temis.

Yrureta, Y. (2007). El Juez en el proceso oral del Código de Procedimiento Civil de 1987 Vigente. ***Memoria del VII Congreso Venezolano de Derecho Procesal.*** (pp.203-410). San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira.